

SEÑOR:
JUEZ CONSTITUCIONAL (REPARTO).
(E. S. D.).

REF.: ACCIÓN DE TUTELA PARA LA PROTECCIÓN DE DERECHOS FUNDAMENTALES.

Yo, BRAULIO ARQUÍMEDES YAMPUEZAN ANAMA, identificado con cédula de ciudadanía No. 5.341.719 expedida en Santacruz, Nariño, actuando en mi condición de ex Gobernador del Resguardo Indígena de Guachavés, autoridad tradicional y mayor conocedor de los usos, costumbres y del Derecho Propio de la comunidad, en ejercicio de la acción consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política y desarrollada por el Decreto 2591 de 1991, acudo ante su despacho con el fin de solicitar la protección inmediata de mis derechos fundamentales —y los de la comunidad indígena del Resguardo Indígena de Guachavés— al debido proceso, derecho de petición, autonomía y gobierno propio de los pueblos indígenas, jurisdicción especial indígena, participación, acceso a la información, publicidad de las actuaciones administrativas y dignidad colectiva, los cuales han sido vulnerados por las actuaciones y omisiones del Ministerio del Interior, particularmente con ocasión de la expedición y confirmación de la Resolución 007 de 2026, las irregularidades relacionadas con su publicidad y notificación, la ausencia de trazabilidad respecto de actuaciones administrativas posteriores y la consolidación de efectos administrativos en medio de controversias internas sometidas al Derecho Propio y a la Jurisdicción Especial Indígena del Resguardo.

HECHOS

PRIMERO. El Resguardo Indígena de Guachavés, ubicado en jurisdicción del municipio de Santacruz, departamento de Nariño, cuenta con un Reglamento Interno vigente, construido conforme al Derecho Propio, los usos y costumbres de la comunidad, la Constitución Política y el bloque de constitucionalidad, en el cual se regulan de manera expresa la organización del Cabildo, los procesos de elección de autoridades, las inhabilidades para ejercer cargos de gobierno propio, así como el funcionamiento de la

Jurisdicción Especial Indígena como instancia natural de resolución de conflictos internos.

SEGUNDO. En desarrollo de dicho marco normativo propio, el día 14 de diciembre de 2025 se llevó a cabo el proceso de elección de las autoridades del Cabildo del Resguardo Indígena de Guachavés para el período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2026, proceso que desde su desarrollo presentó múltiples cuestionamientos relacionados con su transparencia, legalidad y conformidad con el Reglamento Interno.

TERCERO. Con anterioridad a la expedición del acto administrativo hoy cuestionado, específicamente el 22 de diciembre de 2025, se presentó ante el Ministerio del Interior una denuncia formal por irregularidades en el proceso electoral, en la cual se puso en conocimiento de dicha entidad la existencia de prácticas contrarias al Derecho Propio, entre ellas la realización de campaña política indebida, la entrega de dádivas y el suministro de transporte a votantes, conductas expresamente prohibidas por el Reglamento Interno del Resguardo.

CUARTO. De manera paralela, y en ejercicio de la autonomía jurisdiccional reconocida constitucionalmente a los pueblos indígenas, el día 1 de enero de 2026 se radicó ante la autoridad propia del Resguardo Indígena de Guachavés una solicitud de apertura de proceso en el marco de la Jurisdicción Especial Indígena, dirigida a investigar y esclarecer hechos relacionados con la conducta de la señora Sandra Leticia Cuastumal, en su calidad de persona electa como gobernadora, así como las irregularidades presentadas durante el proceso electoral, activándose de esta manera el mecanismo natural de control y decisión conforme al Derecho Propio.

QUINTO. A la fecha de radicación de dicha solicitud, los hechos sometidos a conocimiento de la Jurisdicción Especial Indígena no habían sido resueltos de fondo, encontrándose en trámite procesos internos relacionados con posibles faltas, inhabilidades y transgresiones al Reglamento Interno que incidían directamente en la validez del proceso electoral y en la legitimidad de las autoridades resultantes.

SEXTO. No obstante la existencia de denuncias previas y de procesos jurisdiccionales indígenas en curso, el Ministerio del Interior expidió la

Resolución 007 del 29 de enero de 2026, mediante la cual procedió a registrar como Gobernadora Principal del Resguardo Indígena de Guachavés a la señora Sandra Leticia Cuastumal Mueses, así como a los demás miembros del Cabildo, otorgando efectos administrativos a un proceso electoral cuya legalidad se encontraba controvertida y no había sido definida por la autoridad competente en el marco del Derecho Propio.

SÉPTIMO. La expedición de la mencionada resolución se produjo sin que el Ministerio del Interior valorara de manera integral y suficiente las denuncias presentadas, ni la existencia de procesos en curso ante la Jurisdicción Especial Indígena, desconociendo de esta manera la autonomía del Resguardo, la competencia de sus autoridades jurisdiccionales y el deber de coordinación y respeto entre jurisdicciones.

OCTAVO. La Resolución 007 de 2026 no fue objeto de publicación general ni de comunicación efectiva a la comunidad indígena del Resguardo de Guachavés, ni se dispuso su divulgación a través de medios institucionales accesibles, razón por la cual los comuneros y exautoridades no tuvieron conocimiento oportuno ni completo de su contenido.

NOVENO. El conocimiento de la existencia y de un contenido parcial del acto administrativo por parte de la comunidad se produjo de manera informal, a través de la circulación de un pantallazo difundido por medio de la aplicación WhatsApp, en el cual se compartía un fragmento de la resolución, circunstancia que evidencia la ausencia absoluta de mecanismos formales de publicidad y comunicación por parte de la entidad accionada.

DÉCIMO. Ante dicha situación, y con base en la información fragmentaria obtenida, el suscrito, en calidad de ex Gobernador del Resguardo y autoridad tradicional, procedió a interponer el día 10 de febrero de 2026 recurso de reposición y en subsidio de apelación contra la Resolución 007 de 2026, cuestionando su legalidad por la vulneración del Derecho Propio, el desconocimiento de la Jurisdicción Especial Indígena, la existencia de inhabilidades, las irregularidades electorales y la falta de publicidad del acto administrativo.

DÉCIMO PRIMERO. Los recursos interpuestos fueron debidamente sustentados, acompañados de pruebas documentales pertinentes y dirigidos

a que la administración revisara integralmente el acto administrativo, suspendiera sus efectos y garantizara el respeto por la autonomía indígena y el debido proceso intercultural.

DÉCIMO SEGUNDO. Con posterioridad a la interposición de los recursos, la Dirección de Asuntos Indígenas, ROM y Minorías expidió la Resolución 029 de 2026, mediante la cual presuntamente resolvió el recurso de reposición y concedió el recurso subsidiario de apelación. Sin embargo, respecto de dicho acto administrativo no existe trazabilidad clara, publicidad suficiente ni constancia conocida de notificación efectiva a las autoridades tradicionales y miembros de la comunidad directamente afectados por la decisión administrativa.

DÉCIMO TERCERO. Posteriormente, el Viceministerio para el Diálogo Social y los Derechos Humanos expidió la Resolución 0548 de 2026, mediante la cual resolvió el recurso de apelación y confirmó integralmente la Resolución 007 de 2026, manteniendo la inscripción de las autoridades registradas para la vigencia 2026.

DÉCIMO CUARTO. En la Resolución 0548 de 2026, el propio Ministerio del Interior reconoce expresamente que el registro de autoridades indígenas tiene carácter declarativo y no constitutivo; que las controversias internas deben resolverse conforme al Derecho Propio; que la Jurisdicción Especial Indígena debe ser respetada; y que el Estado debe evitar intervenciones indebidas en los procesos internos de decisión de las comunidades indígenas.

No obstante, pese a reconocer dichas reglas constitucionales y jurisprudenciales, la entidad accionada decidió confirmar integralmente la Resolución 007 de 2026 y consolidar sus efectos administrativos, aun cuando persistían controversias internas relacionadas con la legalidad del proceso electoral y actuaciones en curso dentro de la Jurisdicción Especial Indígena.

DÉCIMO QUINTO. Dentro de la Resolución 0548 de 2026, el Ministerio del Interior sostuvo que la Resolución 007 de 2026 había sido notificada conforme al artículo 70 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, afirmando además que el recurrente tuvo

“conocimiento efectivo” del acto administrativo por haber ejercido recursos contra el mismo.

Sin embargo, dicha afirmación resulta contradictoria con la realidad material de las actuaciones surtidas, en tanto autoridades tradicionales del Resguardo Indígena de Guachavés, como el Gobernador Suplente MARIO FREDY ANAMA DÍAZ, declararon bajo juramento que jamás fueron notificados personal ni formalmente de la Resolución 007 de 2026, ni recibieron comunicación institucional alguna sobre su expedición, indicando que el único conocimiento parcial del acto se produjo mediante fragmentos difundidos informalmente a través de la aplicación WhatsApp.

DÉCIMO SEXTO. En consecuencia, la actuación del Ministerio del Interior configura una vulneración actual, continua y grave de los derechos fundamentales al debido proceso, al acceso a la información, a la publicidad de las actuaciones administrativas, a la autonomía indígena, al gobierno propio y a la Jurisdicción Especial Indígena, en tanto consolidó efectos administrativos respecto de una controversia interna no resuelta conforme al Derecho Propio, bajo actuaciones cuya publicidad, notificación y trazabilidad administrativa se encuentran seriamente cuestionadas.

DECIMO SEPTIMO : por otra parte el ministerio del interior registro como autoridades al señor JAIRO NAITB el cual pertenece al resguardo indígena de yascual lo cual vulnera la autonomía del resguardo de Guachaves entonces como es posible que el ministerio está inmiscuyéndose en un asunto interno al registrar al señor JAIRO NATIB como parte de la autoridad del resguardo en certificado expedido por la misma entidad se evidencia que el pertenece al resguardo de yascual es indígena de este resguardo no es indígena del resguardo de Guachaves

FUNDAMENTOS DE DERECHO

La presente acción de tutela se fundamenta en la vulneración directa y continuada de derechos fundamentales en el marco de una actuación administrativa que, lejos de respetar el carácter diferencial y la autonomía constitucional de los pueblos indígenas, desconoció de manera sustancial el Derecho Propio del Resguardo Indígena de Guachavés, la existencia de controversias internas sometidas a la Jurisdicción Especial Indígena y las

garantías mínimas del debido proceso administrativo e intercultural, configurando una intervención indebida del Estado en el gobierno propio de la comunidad.

Dicha afectación se agrava por las irregularidades relacionadas con la publicidad, comunicación y trazabilidad de las actuaciones administrativas surtidas por el Ministerio del Interior, particularmente respecto de la Resolución 007 de 2026 y de las decisiones posteriores adoptadas dentro del trámite de los recursos administrativos, circunstancia que comprometió el acceso efectivo a la información, el ejercicio pleno del derecho de defensa y la posibilidad real de contradicción frente a actos administrativos que inciden directamente en la estructura de autoridad y representación del Resguardo.

Así mismo, la vulneración adquiere una especial relevancia constitucional en la medida en que el propio Ministerio del Interior reconoció expresamente, dentro de la Resolución 0548 de 2026, que el registro de autoridades indígenas tiene carácter declarativo y no constitutivo, que las controversias internas deben resolverse conforme al Derecho Propio y que el Estado debe abstenerse de intervenir indebidamente en los procesos internos de decisión de las comunidades indígenas.

No obstante, pese a reconocer dichos principios constitucionales y jurisprudenciales, la entidad accionada confirmó integralmente la Resolución 007 de 2026 y consolidó sus efectos administrativos en medio de controversias internas no resueltas, bajo actuaciones cuya publicidad y notificación se encuentran seriamente cuestionadas.

En consecuencia, la actuación del Ministerio del Interior desconoce los artículos 7, 23, 29, 209, 246 y 330 de la Constitución Política, el bloque de constitucionalidad integrado por el Convenio 169 de la OIT y la jurisprudencia reiterada de la Corte Constitucional en materia de autonomía indígena, pluralismo jurídico, debido proceso intercultural y protección reforzada de los pueblos indígenas, configurando una afectación actual, continua y estructural de derechos fundamentales que exige la intervención inmediata del juez constitucional.

1. Reconocimiento constitucional del Derecho Propio, la autodeterminación y el bloque de constitucionalidad en materia indígena.

La Constitución Política de 1991 erigió el reconocimiento de la diversidad étnica y cultural de la Nación como uno de los pilares estructurales del Estado Social de Derecho, imponiendo a todas las autoridades públicas el deber de respetar, proteger y garantizar la existencia, pervivencia y autodeterminación de los pueblos indígenas como sujetos colectivos de especial protección constitucional. En este sentido, el artículo 7 superior no se limita a una proclamación declarativa, sino que incorpora un mandato jurídico vinculante que obliga a interpretar y aplicar todo el ordenamiento desde una perspectiva de pluralismo jurídico y respeto por las formas propias de organización social, política, jurisdiccional y normativa de las comunidades indígenas.

Este reconocimiento se proyecta de manera concreta en la consagración de la Jurisdicción Especial Indígena en el artículo 246 de la Constitución Política, disposición que habilita a las autoridades de los pueblos indígenas para ejercer funciones jurisdiccionales dentro de su ámbito territorial, conforme a sus normas y procedimientos propios, y que, en armonía con los artículos 1, 7, 8, 70 y 330 superiores, configura un verdadero sistema normativo autónomo, dotado de validez constitucional y no subordinado en su contenido material a la legislación ordinaria, salvo en los límites expresamente fijados por la propia Constitución.

A su vez, este marco se integra con el bloque de constitucionalidad, en particular con el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, incorporado al derecho interno mediante la Ley 21 de 1991, el cual establece la obligación estatal de reconocer y respetar las instituciones, los valores, las prácticas sociales, culturales, religiosas y espirituales de los pueblos indígenas, así como sus métodos tradicionales de regulación y resolución de conflictos. En especial, los artículos 7, 8 y 9 de dicho instrumento internacional disponen que los pueblos indígenas tienen derecho a decidir sus propias prioridades de desarrollo, que al aplicar la legislación nacional deberán tenerse debidamente en cuenta sus costumbres y su derecho consuetudinario, y que las autoridades y tribunales deberán respetar los métodos propios de los pueblos interesados para la resolución de sus conflictos internos.

La Corte Constitucional, en desarrollo de este marco normativo, ha sido reiterativa en señalar que el Derecho Propio constituye una fuente jurídica autónoma, con plena eficacia dentro del ordenamiento constitucional, y que el Estado no puede sustituir, desplazar ni vaciar de contenido las decisiones adoptadas por las autoridades indígenas en el ejercicio de sus competencias propias. En tal sentido, ha precisado que el pluralismo jurídico no es una concesión del Estado, sino una manifestación directa del principio democrático, que reconoce la coexistencia de múltiples sistemas normativos dentro del territorio nacional, cada uno con su propio ámbito de validez.

Bajo este entendimiento, el Reglamento Interno del Resguardo Indígena de Guachavés no constituye una simple manifestación cultural o una norma interna sin efectos jurídicos, sino una expresión legítima del Derecho Propio, dotada de fuerza normativa vinculante tanto para los miembros de la comunidad como para las autoridades estatales, en la medida en que regula aspectos esenciales del gobierno propio, la organización política, los procesos electorales, las inhabilidades, las formas de resolución de conflictos y el ejercicio de la Jurisdicción Especial Indígena.

En este contexto, las actuaciones administrativas relacionadas con el registro de autoridades indígenas deben interpretarse y desarrollarse bajo criterios de respeto reforzado por la autonomía, el gobierno propio y la autodeterminación de las comunidades indígenas, evitando que la intervención estatal termine sustituyendo o interfiriendo indebidamente en decisiones que corresponden al ámbito propio de regulación interna de los pueblos indígenas.

En consecuencia, cualquier actuación administrativa que desconozca, desatienda o intervenga de manera indebida en la aplicación de estas normas propias, no solo vulnera disposiciones reglamentarias internas, sino que compromete directamente el orden constitucional y convencional que protege la autonomía de los pueblos indígenas, configurando una transgresión al bloque de constitucionalidad y a los principios fundantes del Estado Social de Derecho.

2. Alcance de la Jurisdicción Especial Indígena y deber de respeto por parte del Estado.

El artículo 246 de la Constitución Política reconoce a las autoridades de los pueblos indígenas la facultad de ejercer funciones jurisdiccionales dentro de su ámbito territorial, conforme a sus normas y procedimientos propios, configurando una jurisdicción autónoma que hace parte integral de la estructura del Estado colombiano. Esta disposición no solo consagra una competencia, sino que delimita un espacio de autonomía normativa y decisional que debe ser respetado por todas las autoridades públicas, en virtud del principio de pluralismo jurídico que orienta el orden constitucional.

La Jurisdicción Especial Indígena no se reduce a una instancia consultiva o complementaria, sino que constituye el juez natural de los conflictos internos de la comunidad, especialmente aquellos relacionados con la organización política, la elección de autoridades, la verificación de inhabilidades y la resolución de controversias derivadas del ejercicio del gobierno propio. En consecuencia, cuando se activan mecanismos internos de justicia indígena frente a un determinado asunto, se configura un ámbito de competencia prevalente que impide la intervención sustitutiva de autoridades externas, salvo en los estrictos límites fijados por la Constitución Política.

La Corte Constitucional ha sostenido de manera reiterada que la relación entre la jurisdicción ordinaria y la Jurisdicción Especial Indígena se rige por principios de coordinación, respeto y no interferencia indebida, lo cual implica que las autoridades estatales no pueden anticiparse, sustituir ni desconocer las decisiones que deben ser adoptadas por las autoridades indígenas en el marco de sus competencias propias. Este deber de respeto adquiere un carácter reforzado cuando se trata de conflictos que inciden directamente en la legitimidad de las autoridades tradicionales, en la medida en que tales asuntos hacen parte del núcleo esencial del autogobierno indígena.

En el caso concreto, se encuentra acreditado que, con anterioridad a la expedición de la Resolución 007 de 2026, se había activado formalmente la Jurisdicción Especial Indígena del Resguardo de Guachavés mediante solicitudes dirigidas a investigar irregularidades en el proceso electoral y posibles inhabilidades de la persona electa como gobernadora. Esta circunstancia imponía al Ministerio del Interior el deber constitucional de actuar bajo criterios de máxima deferencia y respeto frente a las competencias propias de la jurisdicción indígena.

No obstante, la entidad accionada procedió a registrar y posteriormente confirmar administrativamente a las autoridades del Cabildo mediante las Resoluciones 007 y 0548 de 2026, otorgando plenos efectos administrativos a un proceso electoral cuya legalidad se encontraba controvertida y sometida a conocimiento de la Jurisdicción Especial Indígena. Dicha actuación produjo efectos materiales directos sobre la estructura de autoridad y representación del Resguardo, interfiriendo en un asunto que hacía parte del ámbito natural de decisión de la jurisdicción propia.

Esta situación resulta aún más relevante si se tiene en cuenta que, dentro de la propia Resolución 0548 de 2026, el Ministerio del Interior reconoció expresamente que las controversias internas relacionadas con la elección de autoridades indígenas deben resolverse conforme al Derecho Propio y que el Estado debe abstenerse de intervenir indebidamente en los procesos internos de decisión de las comunidades indígenas. No obstante, pese a reconocer dichos principios constitucionales y jurisprudenciales, la entidad accionada confirmó integralmente la Resolución 007 de 2026 y consolidó sus efectos administrativos, aun cuando persistían controversias internas no resueltas dentro del ámbito de la Jurisdicción Especial Indígena.

Así, la actuación del Ministerio del Interior no solo desconoció la existencia de procesos en curso ante la Jurisdicción Especial Indígena, sino que, en la práctica, terminó sustituyendo la competencia natural de las autoridades indígenas llamadas a resolver el conflicto, afectando la eficacia real de los mecanismos propios de justicia indígena y vulnerando el principio de autonomía que la Constitución reconoce a los pueblos indígenas.

En este sentido, la expedición y posterior confirmación de la Resolución 007 de 2026 constituyen una transgresión directa al artículo 246 de la Constitución Política, al Convenio 169 de la OIT y a la jurisprudencia constitucional que protege la integridad de la Jurisdicción Especial Indígena, en tanto implicaron una intromisión indebida del Estado en la resolución de un conflicto interno que debía ser decidido conforme al Derecho Propio del Resguardo Indígena de Guachavés.

3. Autonomía indígena y gobierno propio como núcleo esencial protegido.

El orden constitucional colombiano reconoce a los pueblos indígenas no solo como sujetos colectivos de especial protección, sino como titulares de un derecho fundamental a la autonomía y al gobierno propio, el cual constituye un elemento estructural de su identidad, pervivencia cultural y organización política. Este reconocimiento se encuentra expresamente consagrado en el artículo 330 de la Constitución Política, que faculta a las autoridades indígenas para gobernar sus territorios conforme a sus usos y costumbres, administrar sus recursos y ejercer funciones de organización interna, en armonía con la Constitución y la ley.

La autonomía indígena no puede ser entendida como una potestad meramente simbólica o limitada, sino como una capacidad real de autodeterminación, que comprende la facultad de definir sus propias autoridades, establecer las reglas de elección, determinar las inhabilidades para el ejercicio de cargos y resolver los conflictos internos conforme a su Derecho Propio. En este sentido, la Corte Constitucional ha sido enfática en señalar que el núcleo esencial de esta autonomía radica en la posibilidad efectiva de los pueblos indígenas de decidir quién los gobierna y bajo qué condiciones se ejerce dicha autoridad, sin interferencias indebidas del Estado.

Bajo esta lógica, la función que ejerce el Ministerio del Interior en materia de registro de autoridades indígenas tiene un carácter estrictamente declarativo, instrumental y de publicidad, orientado a certificar frente a terceros las decisiones adoptadas autónomamente por las comunidades, pero en ningún caso a crearlas, modificarlas o imponerlas. La propia jurisprudencia constitucional y la Resolución 0548 de 2026 reconocen expresamente que el Estado no es fuente de legitimidad de las autoridades indígenas y que dicha legitimidad emana directamente de la comunidad y de sus normas propias.

Sin embargo, en el presente caso, la actuación administrativa desbordó claramente este marco funcional, en la medida en que el Ministerio del Interior procedió a registrar y posteriormente confirmar como autoridades del Resguardo Indígena de Guachavés a personas cuya elección se encontraba controvertida, sometida a procesos internos y cuestionada por posibles irregularidades e inhabilidades previstas en el Derecho Propio. Al hacerlo, no se limitó a dar publicidad a una decisión consolidada de la comunidad, sino que intervino materialmente en la definición de quién ejerce el gobierno

propio, produciendo efectos jurídicos concretos que inciden directamente en la estructura de poder interno del resguardo.

En contextos de controversia interna, el carácter “declarativo” del registro no neutraliza los efectos materiales que produce la actuación administrativa, pues la inscripción y posterior confirmación estatal de determinadas autoridades repercute directamente en la representación política y administrativa del resguardo, en el reconocimiento institucional frente a terceros y en el ejercicio práctico del gobierno propio. Por ello, aun cuando formalmente la función registral no cree autoridades, sí puede generar efectos sustanciales sobre el equilibrio interno de la comunidad cuando se ejerce en medio de disputas no resueltas conforme al Derecho Propio.

Esta actuación implica una afectación sustancial al núcleo esencial de la autonomía indígena, en tanto desplaza la capacidad de la comunidad de definir sus propias autoridades y altera el equilibrio institucional interno, consolidando administrativamente una configuración de gobierno que no había sido definida de manera definitiva por los mecanismos propios de justicia indígena. Más aún, al desconocer la existencia de controversias internas y de procesos en curso ante la Jurisdicción Especial Indígena, la administración sustituyó materialmente la capacidad de autorregulación de la comunidad.

En consecuencia, la Resolución 007 de 2026 y su posterior confirmación mediante la Resolución 0548 de 2026 no pueden ser entendidas como actos neutros o meramente formales, sino como decisiones administrativas que impactan de manera directa el ejercicio del gobierno propio, comprometiendo la autonomía política del Resguardo Indígena de Guachavés. Esta intervención indebida del Estado desconoce los artículos 7, 246 y 330 de la Constitución Política, el Convenio 169 de la OIT y la jurisprudencia constitucional que protege la autodeterminación de los pueblos indígenas, configurando una vulneración directa de un derecho fundamental de carácter colectivo.

De esta manera, la actuación del Ministerio del Interior no solo afecta la validez de un acto administrativo específico, sino que incide estructuralmente en la capacidad del resguardo para autodeterminarse, lo cual justifica la intervención del juez constitucional para restablecer el equilibrio entre la

actuación estatal y la autonomía indígena, en garantía del orden constitucional vigente.

4. Vulneración del debido proceso desde un enfoque intercultural.

El derecho fundamental al debido proceso, consagrado en el artículo 29 de la Constitución Política, constituye una garantía transversal que rige todas las actuaciones administrativas y judiciales, incluyendo aquellas que involucran a pueblos indígenas, respecto de las cuales debe aplicarse con un enfoque intercultural, atendiendo a la existencia de sistemas normativos propios, autoridades naturales y procedimientos diferenciados. En este sentido, el debido proceso no se agota en el cumplimiento formal de etapas procedimentales, sino que exige el respeto efectivo por las competencias de la autoridad legítima, la observancia de las reglas propias y la garantía de que las decisiones sean adoptadas por quien constitucionalmente está llamado a hacerlo.

En contextos indígenas, este derecho adquiere una dimensión reforzada, en tanto el juez natural de los conflictos internos es la Jurisdicción Especial Indígena, de modo que cualquier actuación externa que anticipe, sustituya o desconozca las decisiones que deben adoptarse en dicho escenario constituye una vulneración directa al debido proceso. La Corte Constitucional ha sostenido que el respeto por el juez natural es un elemento esencial de esta garantía, lo cual implica que las controversias deben ser resueltas por la autoridad competente conforme al sistema normativo aplicable, sin interferencias indebidas de otras jurisdicciones o autoridades administrativas.

En el presente caso, se encuentra plenamente acreditado que, al momento de expedición de la Resolución 007 de 2026, existían procesos en curso ante la Jurisdicción Especial Indígena del Resguardo de Guachavés, dirigidos a esclarecer irregularidades en el proceso electoral y a determinar la eventual configuración de inhabilidades que comprometían la validez de la elección de las autoridades. Esta circunstancia imponía a la administración el deber de actuar con especial cautela y de abstenerse de adoptar decisiones que consolidaran los resultados electorales mientras la situación jurídica no se encontrara definida conforme al Derecho Propio.

No obstante, el Ministerio del Interior procedió a registrar y posteriormente confirmar administrativamente a las personas electas como autoridades del Resguardo Indígena de Guachavés, otorgando efectos administrativos a un proceso cuya legalidad estaba siendo cuestionada y sometida a conocimiento de la autoridad indígena competente. Esta actuación configuró una decisión anticipada sobre un asunto sometido a la jurisdicción propia, afectando el derecho al debido proceso en su dimensión intercultural y desconociendo la competencia del juez natural.

A ello se suma que la decisión administrativa no estuvo precedida de un análisis suficiente e integral de las denuncias presentadas ni de los elementos probatorios aportados, lo cual compromete también la garantía de motivación adecuada de los actos administrativos, exigida por el artículo 209 de la Constitución Política y por el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. La omisión en la valoración de hechos relevantes y determinantes, como la existencia de procesos internos en curso y de posibles inhabilidades, impide verificar la razonabilidad y proporcionalidad de la decisión adoptada.

Así mismo, las irregularidades relacionadas con la publicidad, comunicación y trazabilidad de las actuaciones administrativas surtidas dentro del trámite de los recursos administrativos profundizaron la afectación al debido proceso, en tanto restringieron el acceso efectivo a la información, dificultaron el ejercicio pleno del derecho de defensa y limitaron las garantías de contradicción frente a decisiones que incidían directamente en la estructura de autoridad del Resguardo Indígena de Guachavés. En particular, se encuentra seriamente cuestionada la publicidad y trazabilidad de la Resolución 029 de 2026, mediante la cual presuntamente se resolvió el recurso de reposición, así como la afirmación del Ministerio relativa a la supuesta notificación efectiva de la Resolución 007 de 2026, contradicha por las declaraciones rendidas por autoridades tradicionales de la comunidad.

En consecuencia, la actuación del Ministerio del Interior configura una vulneración integral del derecho fundamental al debido proceso, en tanto desconoció la competencia de la Jurisdicción Especial Indígena, adoptó decisiones administrativas con incidencia material sobre un conflicto interno no resuelto conforme al Derecho Propio, omitió valorar elementos relevantes y comprometió las garantías mínimas de publicidad, defensa y contradicción

dentro de la actuación administrativa, afectando de manera directa los derechos del accionante y de la comunidad indígena del Resguardo de Guachavés.

5. Principio de legalidad administrativa y desviación de poder en el acto de registro.

El artículo 209 de la Constitución Política establece que la función administrativa se desarrolla con fundamento en los principios de legalidad, imparcialidad, eficacia, economía, celeridad, publicidad y responsabilidad, lo cual implica que toda actuación de la administración debe estar estrictamente sujeta a la Constitución Política, la ley, el bloque de constitucionalidad y los hechos debidamente acreditados en cada caso concreto. Este mandato se desarrolla en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, que exige que los actos administrativos se encuentren debidamente motivados, fundados en hechos ciertos y orientados exclusivamente al cumplimiento de la finalidad para la cual fue atribuida la competencia administrativa.

En el presente caso, las Resoluciones 007 y 0548 de 2026 presentan vicios sustanciales que comprometen su validez jurídica, en la medida en que la autoridad administrativa desbordó el alcance de su competencia registral y utilizó dicha facultad para producir efectos materiales que exceden su naturaleza constitucional y legal. Como ha sido reconocido por la propia normativa, por la jurisprudencia constitucional y por la misma Resolución 0548 de 2026, el registro de autoridades indígenas tiene un carácter declarativo y de publicidad, dirigido a certificar frente a terceros las decisiones adoptadas por la comunidad conforme a su Derecho Propio, sin que implique la creación, modificación o convalidación de dichas autoridades.

No obstante, en el caso concreto, el Ministerio del Interior no se limitó a cumplir una función certificadora, sino que, al registrar y posteriormente confirmar autoridades en un contexto de controversia interna no resuelta, terminó por incidir materialmente en la definición de la estructura de gobierno del Resguardo Indígena de Guachavés, otorgando efectos administrativos y reconocimiento institucional a un proceso electoral cuya validez estaba

siendo cuestionada y sometida a conocimiento de la Jurisdicción Especial Indígena.

Esta actuación desbordó el ámbito propio de la función registral y transformó la naturaleza del acto administrativo, convirtiéndolo en un instrumento de intervención en el gobierno propio del resguardo. En contextos de disputa interna, la actuación estatal relacionada con el reconocimiento administrativo de autoridades no es neutra, pues produce efectos concretos sobre la representación política, la interlocución institucional y el ejercicio material de la autoridad dentro de la comunidad.

Desde la perspectiva del principio de legalidad, las decisiones adoptadas adolecen además de falsa motivación, en tanto omitieron considerar hechos relevantes y determinantes para la adopción de los actos administrativos, como la existencia de denuncias formales por irregularidades electorales, la activación de procesos ante la Jurisdicción Especial Indígena y la posible configuración de inhabilidades previstas en el Reglamento Interno del Resguardo Indígena de Guachavés. La ausencia de valoración integral de estos elementos impide sostener que las decisiones administrativas se encuentren fundadas en una apreciación completa, objetiva y constitucionalmente adecuada de la realidad fáctica.

Adicionalmente, se configura un supuesto de desviación de poder, en la medida en que la competencia registral fue utilizada con una finalidad distinta a aquella para la cual fue atribuida por el ordenamiento jurídico. En lugar de limitarse a certificar una decisión consolidada de la comunidad, la administración utilizó el registro para consolidar una situación jurídica en medio de un conflicto no resuelto, alterando el equilibrio institucional interno del resguardo y produciendo efectos directos sobre la autonomía y el gobierno propio de la comunidad indígena.

Este desbordamiento funcional resulta aún más grave si se tiene en cuenta que, dentro de la propia Resolución 0548 de 2026, el Ministerio del Interior reconoció expresamente que las controversias relacionadas con la legitimidad de autoridades indígenas deben resolverse conforme al Derecho Propio y bajo el ámbito de competencia de las autoridades indígenas. No obstante, pese a reconocer dichos límites constitucionales, la entidad accionada confirmó integralmente la Resolución 007 de 2026 y consolidó sus

efectos administrativos, profundizando la afectación sobre la autonomía del Resguardo Indígena de Guachavés.

En este contexto, la actuación del Ministerio del Interior no puede ser entendida como una simple irregularidad administrativa, sino como una afectación estructural al principio de legalidad y a los límites constitucionales de la función administrativa en contextos interculturales, lo cual compromete la validez de las actuaciones cuestionadas y justifica la intervención del juez constitucional.

En consecuencia, las Resoluciones 007 y 0548 de 2026 constituyen actos administrativos expedidos con desconocimiento del principio de legalidad y con desviación de poder, en tanto la autoridad accionada utilizó su competencia registral para intervenir indebidamente en el gobierno propio del Resguardo Indígena de Guachavés, omitiendo valorar hechos determinantes y adoptando decisiones que exceden los límites constitucionales de su función, configurando una vulneración directa de los derechos fundamentales invocados en la presente acción.

6. Vulneración del principio de publicidad y del derecho de acceso a la información.

El principio de publicidad, consagrado en el artículo 209 de la Constitución Política, constituye una garantía estructural del Estado Social de Derecho y un presupuesto indispensable para la validez, eficacia y legitimidad de la actuación administrativa. En desarrollo de este mandato, el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo —CPACA—, particularmente en sus artículos 3, 65, 66, 67 y 70, establece que los actos administrativos deben ser objeto de publicación, notificación o comunicación, según su naturaleza, con el fin de garantizar su conocimiento por parte de los interesados y permitir el ejercicio efectivo de los derechos de defensa, contradicción y control.

En este sentido, la publicidad no puede ser entendida como una formalidad secundaria o meramente instrumental, sino como una condición esencial para que los actos administrativos produzcan efectos jurídicos oponibles frente a terceros. La Corte Constitucional ha señalado que el acceso a la información pública y la transparencia en las actuaciones del Estado son elementos

indispensables para garantizar la participación, el control social y la vigencia de los derechos fundamentales, especialmente en contextos donde las decisiones administrativas inciden de manera directa en derechos colectivos y en formas de organización protegidas constitucionalmente.

En el presente caso, la Resolución 007 de 2026 no fue objeto de publicación general ni de un mecanismo efectivo de comunicación que garantizara su conocimiento por parte de la comunidad indígena del Resguardo de Guachavés, a pesar de tratarse de un acto administrativo que incidía directamente en la definición de sus autoridades, en el ejercicio del gobierno propio y en la representación institucional del territorio. La decisión fue comunicada únicamente a las personas registradas como autoridades y a la administración municipal, excluyendo de manera injustificada a la comunidad como sujeto colectivo directamente afectado por la actuación administrativa.

Esta omisión resulta particularmente grave si se tiene en cuenta que la comunidad indígena no tuvo acceso oportuno ni completo al contenido del acto administrativo, y que el conocimiento parcial de su existencia se produjo de manera informal, a través de la difusión de fragmentos de la resolución mediante la aplicación de mensajería WhatsApp. Esta circunstancia evidencia la ausencia de mecanismos institucionales suficientes de publicidad y comunicación por parte de la entidad accionada, así como la falta de garantías mínimas para el acceso efectivo a la información en condiciones de transparencia y seguridad jurídica.

Dicha situación se encuentra además respaldada por la declaración juramentada rendida por MARIO FREDY ANAMA DÍAZ, Gobernador Suplente del Resguardo Indígena de Guachavés, quien manifestó bajo gravedad de juramento que jamás fue notificado personal ni formalmente de la Resolución 007 de 2026, ni recibió comunicación institucional alguna sobre su expedición, indicando que el único conocimiento parcial del acto administrativo se produjo mediante fragmentos difundidos informalmente a través de WhatsApp.

La falta de publicidad del acto administrativo no solo impidió el conocimiento oportuno de su contenido, sino que restringió de manera directa el ejercicio del derecho de defensa y de contradicción, en tanto los comuneros y exautoridades no contaron con la información necesaria para ejercer

adecuadamente los mecanismos de control administrativo y controvertir la decisión adoptada en condiciones reales de igualdad y acceso a la información.

Adicionalmente, las irregularidades relacionadas con la publicidad y trazabilidad administrativa no se limitaron a la Resolución 007 de 2026, sino que se proyectaron sobre las actuaciones posteriores surtidas dentro del trámite de los recursos administrativos. En particular, se encuentra cuestionada la trazabilidad y comunicación efectiva de la Resolución 029 de 2026, mediante la cual presuntamente se resolvió el recurso de reposición y se concedió el recurso subsidiario de apelación, circunstancia que profundiza la afectación a las garantías mínimas de publicidad y transparencia administrativa.

Así mismo, aunque la entidad accionada sostuvo dentro de la Resolución 0548 de 2026 que la Resolución 007 había sido notificada conforme al artículo 70 del CPACA y que existió “conocimiento efectivo” del acto administrativo, dicha afirmación desconoce que el conocimiento informal o fragmentario de una actuación administrativa no equivale constitucional ni legalmente a una notificación válida ni satisface el principio de publicidad administrativa.

En consecuencia, las actuaciones administrativas adelantadas por el Ministerio del Interior carecen de garantías suficientes de publicidad, comunicación y trazabilidad frente a la comunidad indígena directamente afectada, lo cual configura una vulneración autónoma de los derechos fundamentales al acceso a la información, al debido proceso y a la participación, comprometiendo además la validez y eficacia constitucional de las decisiones administrativas cuestionadas.

7. Afectación del derecho de petición, del derecho de defensa y de la trazabilidad administrativa en el trámite de los recursos

El derecho fundamental de petición, consagrado en el artículo 23 de la Constitución Política y desarrollado por la Ley 1755 de 2015, garantiza a toda persona la posibilidad de elevar solicitudes respetuosas ante las autoridades y obtener una respuesta pronta, de fondo, clara, precisa, congruente y debidamente notificada. Esta garantía no se satisface únicamente con la expedición formal de una decisión, sino que exige que el interesado pueda

conocer efectivamente su contenido, comprender sus fundamentos y ejercer, en condiciones reales, los mecanismos de defensa que el ordenamiento jurídico le reconoce.

En el ámbito administrativo, los recursos de reposición y apelación constituyen una manifestación concreta del derecho de contradicción y defensa frente a los actos administrativos. Por ello, la autoridad competente no solo está obligada a resolverlos mediante acto motivado, sino también a garantizar la trazabilidad, comunicación y publicidad suficiente de las decisiones que se adopten dentro de dicho trámite, especialmente cuando se trata de actuaciones que afectan derechos fundamentales, sujetos colectivos de especial protección constitucional y procesos internos de comunidades indígenas.

En el presente caso, el accionante interpuso recurso de reposición y en subsidio de apelación contra la Resolución 007 de 2026, cuestionando su legalidad por la presunta vulneración del Derecho Propio, el desconocimiento de la Jurisdicción Especial Indígena, la existencia de irregularidades electorales, posibles inhabilidades y la falta de publicidad del acto administrativo. Dichos recursos fueron sustentados y acompañados de elementos probatorios relevantes, dirigidos a obtener una revisión integral de la actuación administrativa.

Con posterioridad, el Ministerio del Interior afirmó dentro de la Resolución 0548 de 2026 que la Dirección de Asuntos Indígenas, ROM y Minorías expidió la Resolución 029 de 2026, mediante la cual habría resuelto el recurso de reposición y concedido el recurso subsidiario de apelación. Sin embargo, frente a dicha Resolución 029 no existe trazabilidad clara, constancia conocida de notificación efectiva ni publicidad suficiente que permita verificar de manera cierta cuándo, cómo y a quién fue comunicada dicha decisión dentro del trámite administrativo.

Esta ausencia de trazabilidad no es una irregularidad menor, pues afecta directamente el derecho de defensa y contradicción del accionante y de la comunidad indígena interesada. En una actuación administrativa que incide en la estructura de gobierno propio de un resguardo indígena, la administración tiene una carga reforzada de transparencia, publicidad y motivación, de modo que las decisiones no pueden quedar reducidas a

simples referencias posteriores dentro de otro acto administrativo, sin que exista certeza sobre su comunicación efectiva.

De igual manera, aunque la Resolución 0548 de 2026 resolvió el recurso de apelación y confirmó integralmente la Resolución 007 de 2026, dicha decisión no subsana las irregularidades previas relacionadas con la publicidad del acto inicial ni con la trazabilidad del trámite recursivo. Por el contrario, al sostener que el conocimiento informal o fragmentario de la Resolución 007 equivalía a conocimiento efectivo suficiente, la entidad accionada redujo indebidamente las garantías propias del derecho de petición, del debido proceso administrativo y del derecho de defensa.

La afectación resulta aún más grave si se tiene en cuenta que la discusión administrativa no versaba sobre un asunto ordinario, sino sobre la inscripción de autoridades indígenas en un contexto de controversia interna, Derecho Propio y Jurisdicción Especial Indígena. En ese escenario, la respuesta administrativa debía garantizar no solo una decisión formal, sino un estándar reforzado de claridad, trazabilidad, publicidad y comunicación efectiva frente a los sujetos directamente afectados.

En consecuencia, aun cuando el Ministerio del Interior expidió una decisión posterior frente al recurso de apelación, persiste una vulneración constitucional derivada de la falta de trazabilidad suficiente del trámite de reposición, de las deficiencias en la publicidad y comunicación de los actos administrativos y de la afectación material del derecho de defensa, contradicción y acceso efectivo a la información administrativa.

8. Configuración de una vulneración actual, continua y agravada de derechos fundamentales.

De conformidad con los hechos expuestos y los fundamentos jurídicos desarrollados, en el presente caso se configura una vulneración actual, continua y estructural de derechos fundamentales, en los términos de los artículos 2, 23, 29 y 86 de la Constitución Política, que no se agota en la expedición inicial de la Resolución 007 de 2026, sino que se prolonga en el tiempo como consecuencia de la consolidación y mantenimiento de sus efectos administrativos, pese a las controversias internas existentes, las irregularidades denunciadas y las deficiencias relacionadas con la publicidad,

trazabilidad y comunicación de las actuaciones surtidas por el Ministerio del Interior.

La vulneración es actual, en la medida en que las Resoluciones 007 y 0548 de 2026 continúan produciendo efectos jurídicos concretos sobre la representación institucional del Resguardo Indígena de Guachavés, el ejercicio del gobierno propio, la interlocución administrativa y la estructura interna de autoridad de la comunidad, en contravía de lo dispuesto en los artículos 7, 246 y 330 de la Constitución Política, así como de los artículos 7, 8 y 9 del Convenio 169 de la OIT, que obligan al Estado a respetar las instituciones propias, el Derecho Propio y los mecanismos tradicionales de resolución de conflictos de los pueblos indígenas.

Es continua, porque la afectación no cesó con la expedición de la Resolución 0548 de 2026, sino que se mantuvo y profundizó mediante la confirmación integral de la Resolución 007 de 2026 y la consolidación administrativa de sus efectos, aun cuando persistían controversias internas sometidas a la Jurisdicción Especial Indígena y cuestionamientos relacionados con la legalidad del proceso electoral, la publicidad de las actuaciones administrativas y la trazabilidad del trámite recursivo.

Y es agravada, en tanto concurren múltiples factores que intensifican la afectación constitucional: la expedición y confirmación de actos administrativos en un contexto de conflicto interno sometido a la Jurisdicción Especial Indígena; el desconocimiento del Derecho Propio como fuente normativa autónoma; las deficiencias relacionadas con la publicidad, comunicación y trazabilidad de las actuaciones administrativas; y la utilización material de una función registral de carácter declarativo para producir efectos directos sobre la estructura de gobierno propio del resguardo. Esta concurrencia de irregularidades configura una transgresión simultánea de los principios de legalidad, publicidad, debido proceso administrativo e intercultural y autonomía indígena, en los términos de los artículos 7, 29, 209, 246 y 330 de la Constitución Política.

Adicionalmente, la naturaleza colectiva de los derechos involucrados impone una lectura reforzada de la afectación, en tanto no se trata únicamente de una controversia individual, sino de una situación que impacta directamente a la comunidad indígena como sujeto colectivo de derechos, titular de

autonomía, gobierno propio y jurisdicción especial reconocidos constitucionalmente. En este contexto, la actuación estatal cuestionada no solo afecta derechos fundamentales individuales, sino que compromete la integridad del sistema normativo propio del Resguardo Indígena de Guachavés y altera el equilibrio institucional interno de la comunidad.

La jurisprudencia constitucional ha sido reiterativa en señalar que la acción de tutela procede de manera excepcional frente a actos administrativos cuando estos generan una vulneración directa de derechos fundamentales y los mecanismos ordinarios no resultan idóneos o eficaces para conjurar la afectación actual, o cuando se requiere una intervención urgente del juez constitucional para evitar la consolidación de un perjuicio constitucionalmente relevante. En el presente caso, si bien existen mecanismos ante la jurisdicción contencioso administrativa, estos no resultan eficaces para conjurar de manera inmediata la afectación actual sobre la autonomía indígena, el gobierno propio, el debido proceso intercultural y la Jurisdicción Especial Indígena, especialmente teniendo en cuenta que los efectos administrativos cuestionados continúan produciéndose en la realidad.

En consecuencia, la situación descrita exige la intervención inmediata del juez constitucional para adoptar medidas urgentes dirigidas a restablecer el orden constitucional vulnerado, garantizar el respeto por el Derecho Propio y la Jurisdicción Especial Indígena y evitar que la actuación irregular del Estado continúe produciendo efectos contrarios a la Constitución Política y al bloque de constitucionalidad.

PRETENSIONES

Con fundamento en los hechos expuestos, en las disposiciones constitucionales y legales invocadas, así como en el bloque de constitucionalidad y la jurisprudencia reiterada de la Corte Constitucional en materia de protección reforzada de los pueblos indígenas, y ante la configuración de una vulneración actual, continua y agravada de derechos fundamentales, respetuosamente solicito al despacho se sirva acceder a las siguientes pretensiones:

PRIMERA. Que se amparen los derechos fundamentales al debido proceso, autonomía y gobierno propio de los pueblos indígenas, Jurisdicción Especial

Indígena, acceso a la información, publicidad de las actuaciones administrativas, participación y derecho de defensa, los cuales han sido vulnerados por el Ministerio del Interior con ocasión de la expedición de las Resoluciones 007 y 0548 de 2026, así como por las irregularidades relacionadas con la publicidad, comunicación y trazabilidad de las actuaciones administrativas surtidas dentro del trámite recursivo correspondiente.

SEGUNDA. Que, como consecuencia de lo anterior, se ordene al Ministerio del Interior suspender de manera inmediata los efectos jurídicos de las Resoluciones 007 y 0548 de 2026, hasta tanto se resuelvan de fondo las controversias existentes en el marco de la Jurisdicción Especial Indígena del Resguardo Indígena de Guachavés y se garantice el respeto efectivo por el Derecho Propio, el debido proceso intercultural y la autonomía de la comunidad indígena.

TERCERA. Que se ordene al Ministerio del Interior abstenerse de adoptar decisiones o actuaciones que impliquen la consolidación, ejecución, desarrollo o reconocimiento institucional derivado de las Resoluciones 007 y 0548 de 2026, mientras persistan procesos en curso ante la Jurisdicción Especial Indígena o controversias internas no resueltas conforme al Derecho Propio del Resguardo Indígena de Guachavés.

CUARTA. Que se ordene al Ministerio del Interior garantizar la debida publicidad y comunicación de las Resoluciones 007, 029 y 0548 de 2026 frente a la comunidad indígena del Resguardo de Guachavés, mediante mecanismos idóneos, suficientes, accesibles y culturalmente adecuados, que permitan el acceso real y oportuno a su contenido y el ejercicio pleno de los derechos de defensa, contradicción y participación.

QUINTA. Que se ordene al Ministerio del Interior implementar medidas administrativas orientadas a garantizar la publicidad y trazabilidad de los actos administrativos relacionados con el registro de autoridades indígenas, incluyendo su publicación en medios institucionales oficiales de acceso público, en condiciones que aseguren el conocimiento oportuno por parte de las comunidades indígenas y de los sujetos directamente interesados.

SEXTA. Que se advierta al Ministerio del Interior que, en el ejercicio de sus funciones relacionadas con el registro de autoridades indígenas, deberá abstenerse de intervenir materialmente en la definición de autoridades tradicionales cuando existan controversias internas, procesos en curso ante la Jurisdicción Especial Indígena o cuestionamientos fundados sobre la legalidad de los procesos electorales, en respeto de la autonomía, el gobierno propio y el Derecho Propio de las comunidades indígenas.

SEPTIMO: ordenar al ministerio del interior dejar sin efecto los actos administrativos expedidos para el resguardo de Guachaves ya que se está registrando al señor JAIRO NATIB como parte de la autoridad sabiendo que él no pertenece al resguardo de Guachaves sino a otro resguardo como es en su caso el resguardo de YASCUAL

PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE TUTELA

La presente acción de tutela resulta procedente de conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política y el Decreto 2591 de 1991, en tanto se configura una vulneración actual, directa y continuada de derechos fundamentales que no puede ser eficazmente conjurada mediante los mecanismos ordinarios de defensa judicial.

En primer lugar, si bien el ordenamiento jurídico prevé la posibilidad de acudir a la jurisdicción de lo contencioso administrativo mediante los medios de control de nulidad o de nulidad y restablecimiento del derecho contra actos administrativos como las Resoluciones 007 y 0548 de 2026, lo cierto es que dichos mecanismos no resultan idóneos ni eficaces en el caso concreto, en la medida en que no ofrecen una protección inmediata frente a la afectación actual de derechos fundamentales ni permiten evitar oportunamente la consolidación de una situación contraria al orden constitucional y al bloque de constitucionalidad en materia de derechos de los pueblos indígenas.

La Corte Constitucional ha sostenido de manera reiterada que la acción de tutela procede excepcionalmente contra actos administrativos cuando estos generan una vulneración directa de derechos fundamentales y los mecanismos ordinarios no resultan adecuados para brindar una protección oportuna, o cuando se requiere la intervención urgente del juez constitucional para evitar la consolidación de un perjuicio irremediable. Así mismo, la jurisprudencia ha precisado que la idoneidad de los medios judiciales no

puede analizarse de manera abstracta, sino atendiendo a las condiciones concretas del caso, a la naturaleza de los derechos comprometidos y a la intensidad de la afectación constitucional alegada.

En el presente asunto, la controversia trasciende una simple discusión sobre legalidad administrativa, en tanto involucra la afectación directa del debido proceso intercultural, la autonomía indígena, el gobierno propio y la Jurisdicción Especial Indígena del Resguardo Indígena de Guachavés. Las Resoluciones 007 y 0548 de 2026 continúan produciendo efectos materiales sobre la representación institucional y la estructura interna de autoridad del resguardo, pese a la existencia de controversias internas sometidas al Derecho Propio y a la Jurisdicción Especial Indígena.

De igual manera, la afectación constitucional alegada se encuentra directamente relacionada con irregularidades sustanciales en la publicidad, comunicación y trazabilidad de las actuaciones administrativas surtidas dentro del trámite de registro y de los recursos administrativos, circunstancias que comprometieron el acceso efectivo a la información, el ejercicio pleno del derecho de defensa y las garantías mínimas de contradicción frente a decisiones administrativas que impactan directamente el gobierno propio de una comunidad indígena.

Así mismo, se configura un perjuicio irremediable, en tanto la permanencia de los efectos de las Resoluciones 007 y 0548 de 2026 implica la consolidación administrativa de una situación que afecta directamente el ejercicio del gobierno propio, la legitimidad de las autoridades tradicionales y el funcionamiento de la Jurisdicción Especial Indígena, alterando el equilibrio institucional interno del resguardo y comprometiendo la eficacia real del Derecho Propio como sistema normativo autónomo. Este perjuicio reviste las características de inminencia, gravedad y urgencia exigidas por la jurisprudencia constitucional, en tanto la afectación es actual, recae sobre derechos fundamentales de carácter colectivo y requiere una intervención inmediata para evitar su profundización.

La naturaleza colectiva de los derechos involucrados refuerza además la procedencia de la acción de tutela, en tanto la Corte Constitucional ha reconocido que los pueblos indígenas son sujetos de especial protección constitucional, lo cual impone a las autoridades judiciales un deber reforzado de garantía frente a actuaciones estatales que puedan afectar su autonomía, identidad cultural, gobierno propio y formas propias de organización y resolución de conflictos.

En consecuencia, la acción de tutela se erige como el mecanismo judicial idóneo y eficaz para la protección inmediata de los derechos fundamentales vulnerados en el presente caso, no solo por la insuficiencia de los medios ordinarios de defensa judicial, sino por la necesidad urgente de adoptar medidas que restablezcan el orden constitucional vulnerado y eviten la consolidación de una afectación estructural sobre la autonomía y el gobierno propio del Resguardo Indígena de Guachaves.

JURAMENTO

Bajo la gravedad del juramento, manifiesto que no he presentado otra acción de tutela por los mismos hechos y derechos aquí invocados, conforme a lo dispuesto en el artículo 37 del Decreto 2591 de 1991.

NOTIFICACIONES

ACCIONANTE:

BRAULIO ARQUÍMEDES YAMPUEZAN ANAMA.

C.C. No. 5.341.719 de Santacruz, Nariño.

Dirección: Casa de habitación, municipio de Santacruz, Guachavés.

Teléfono: 3117095516.

Correo electrónico: notificacionesasesoriajuridica@gmail.com

ENTIDAD ACCIONADA:

MINISTERIO DEL INTERIOR.

Dirección de Asuntos Indígenas, ROM y Minorías.

Dirección: Carrera 8 No. 7-83, Bogotá D.C.

Correo electrónico: notificacionesjudiciales@mininterior.gov.co

Atentamente,

BRAULIO ARQUÍMEDES YAMPUEZAN ANAMA.

C.C. 5.341.719 de Santacruz, Nariño.

En consecuencia, la acción de tutela se erige como el mecanismo judicial idóneo y eficaz para la protección inmediata de los derechos fundamentales vulnerados en el presente caso, no solo por la insuficiencia de los medios ordinarios de defensa, sino por la necesidad de adoptar medidas urgentes que restablezcan el orden constitucional y eviten la consolidación de una afectación estructural a la autonomía del Resguardo Indígena de Guachavés.

JURAMENTO

Bajo la gravedad del juramento, manifiesto que no he presentado otra acción de tutela por los mismos hechos y derechos aquí invocados, conforme a lo dispuesto en el artículo 37 del Decreto 2591 de 1991.

NOTIFICACIONES

ACCIONANTE:

BRAULIO ARQUÍMEDES YAMPUEZAN ANAMA.

C.C. No. 5.341.719 de Santacruz, Nariño.

Dirección: Casa de habitación, municipio de Santacruz, Guachavés.

Teléfono: 3117095516.

Correo electrónico: notificacionesasesoriajuridica@gmail.com

ENTIDAD ACCIONADA:

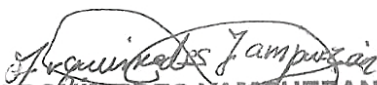
MINISTERIO DEL INTERIOR.

Dirección de Asuntos Indígenas, ROM y Minorías.

Dirección: Carrera 8 No. 7-83, Bogotá D.C.

Correo electrónico: notificacionesjudiciales@mininterior.gov.co

Atentamente,


BRAULIO ARQUÍMEDES YAMPUEZAN ANAMA.
C.C. 5.341.719 de Santacruz, Nariño.

REPUBLICA DE COLOMBIA
 IDENTIFICACION PERSONAL
 Cedula de Ciudadania

NOMBRE 5.341.719
 YAMPUEZAN ANAMA

APELLIDOS
 BRAULIO ARQUIMEDES
 ROMERO

FOLIO




FECHA DE NACIMIENTO 08-NOV-1954
 SANTACRUZ (GUACHAVES)
 LUGAR DE NACIMIENTO

1.68
 ESTATURA

04
 OJOS

M
 SEXO

16 SEP 1977 SANTACRUZ
 FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

PRONCE DULCINO

REGISTRADOR NACIONAL
 DE IDENTIFICACION PERSONAL




A 2312700 00167803 M 0005311719 N000810 0014735325A 1 27148305



REGLAMENTO INTERNO DEL RESGUARDO INDIGENA DE GUACHAVES

(Construido el 23 de octubre de 1999 y modificaciones realizadas el 14 de noviembre de 2010, 11 de noviembre de 2014 y 10 de noviembre de 2017)

Por medio del cual el Cabildo Indígena de Guachavés, en uso de sus facultades que le otorga el Derecho Mayor, la Ley de Origen, la Ley Natural, la Constitución Política de Colombia, la Ley 89 de 1890, el Convenio 169 de la OIT o Ley 21 de 1991, y todas aquellas que benefician a las comunidades indígenas, la Legislación Indígena, los Usos y Costumbres; dicta normas tendientes a mantener el territorio, la unidad, garantizar los derechos fundamentales y colectivos que garanticen la organización de la comunidad y el buen funcionamiento de la Autoridad Indígena del Resguardo de Guachavés en el municipio de Santacruz departamento de Nariño

CAPITULO I

DE LAS DEFINICIONES

ARTICULO 1.- DEFINICIONES: Son las siguientes:

SISTEMA DE DERECHO MAYOR: Es la ciencia que los indígenas hemos recibido de nuestros mayores y caciques, que nace de la tierra y la comunidad; son normas de orden natural, cultural y espiritual encaminadas a fortalecer la organización de las comunidades, la justicia propia, la autoridad, la autonomía, la educación, la espiritualidad y la gobernabilidad al interior del Resguardo; que tiene plena validez jurídica y que presenta primacía sobre los demás derechos consagrados constitucionalmente por varias razones.

LEY DE ORIGEN: La ley de origen es la ciencia tradicional de la sabiduría y el conocimiento ancestral indígena, para el manejo de todo lo material y espiritual, cuyo cumplimiento garantiza el equilibrio y la armonía de la naturaleza, el orden y la permanencia de la vida, del universo y de nosotros mismos como pueblos indígenas guardianes de la naturaleza, regula las relaciones entre los seres vivos desde las piedras hasta el ser humano, en la perspectiva de la unidad y la convivencia en los territorios ancestrales legados desde la materialización del mundo.

LEY NATURAL: Es el conjunto de normas objetivas que rigen la naturaleza independientemente de la voluntad del hombre, con el fin de lograr una interrelación hombre – naturaleza para conservar el equilibrio natural (día-noche, lluvia, viento).



CAPITULO II

CONSIDERACIONES GENERALES

ARTÍCULO 2. DEL RESGUARDO INDIGENA DE GUACHAVES: AMBITO DE APLICACIÓN TERRITORIAL: El Resguardo Indígena de Guachavés, resguardo de origen colonial que hace parte del Gran Territorio de los Pastos y sus límites están comprendidos de la siguiente manera: Los límites más precisos del resguardo Indígena de Guachavés teniendo en los Amparos y Reales Providencias de 1772 y ratificados por la Escritura Colonial 641 de 1904 y los límites del municipio de Santacruz según la Ordenanza 4 de abril 26 de 1913 son los siguientes: **Por la parte de arriba**, los páramos altos que se incluyen en tierras de dicho pueblo y montañas todas de atrás que se han nombrado Astaron, **por la parte de abajo** el rio Grande (Yue) que llaman de Guachavés que nace en el Azufral, en cuya inmediación tiene Félix Álvarez un pedazo de tierras que compro a su Majestad; **por el un lado** deslinda con tierras de Taquelan que las divide el cerro que llaman Tolambu o Pueran cacharras en medio y un hueco que hace por bajo del Salado hasta el páramo alto llamado Tescorral y **por el otro costado**, dividen estas tierras la loma nombrada Guamanchag que se comprende en estos linderos; y bajando más abajo hacia el camino real que se va para Manchag, divide las tierras de estas con las de Nicolás Patiño nombradas Chagues según y conforme consta de la vista de ojos hecha de mi Juez a los veintiún (21) días del presente mes y también en la que hizo el Capitán don Miguel de Gangotena Juez que del beneficio de tierras a los ocho (8) días del mes de junio de mil setecientos setenta y siete (1777) años, con claridad del dicho camino va para Manchag en las dichas tierras de Chagues, sube desde la Quebrada Honda que llaman Cucalchag, quedándoles a los mencionados indios todas las tierras del camino para arriba que va para Manchag, que hoy son los referidos linderos con todas sus aguas saladas y abrevaderos, lomas, montañas y limpios, con todas sus entradas y salidas, sus costumbres y servidumbres, cuantas han poseído de derecho de pertenencia. Los límites más detallados son los siguientes: **Por la parte de arriba** desde el cerro Negro y de este en línea recta, a dar a una ahoyada grande al pie de la rastra que conduce a Tuquerres, hasta encontrar el rio Azufral; este aguas arriba hasta el salto del Azufral y de este punto en recta a dar a otra ahoyada en dirección a un puente de piedra, de aquí la quebrada Palo Flores aguas abajo hasta encontrar la quebrada Chipacued, de aquí aguas abajo hasta encontrar la quebrada La Cruz aguas arriba hasta encontrar la orqueta del Gualkala y de aquí en línea recta por la cuchilla del



Rayo hasta encontrar la quebrada el Rayo aguas abajo hasta encontrar el río Gualkala, este aguas abajo hasta el frente donde nace el río Chapilal, **por la parte de abajo o costado izquierdo** la quebrada Guasi aguas abajo la confluencia con el río Pacual, aguas abajo hasta encontrar la quebrada Cartagena y **por el costado derecho** quebrada Cartagena aguas arriba hasta el cerro el Picacho y de aquí la quebrada la Concordia aguas abajo hasta encontrar la quebrada la Nevada, esta aguas s arriba hasta encontrar la quebrada Camarón, esta aguas arriba hasta el cerro Camarón y de aquí aguas arriba hasta encontrar la quebrada Hastaron y termina. Los límites teniendo en cuenta los municipios y los resguardos serían los siguientes: **por la parte de arriba con** el resguardo de Tuquerres, el municipio de Sapuyes, el resguardo de Mallama y el resguardo de El Sande (Santacruz) **por la parte de abajo o costado izquierdo** con tierras el resguardo de Yascual (Tuquerres) y **por el costado derecho** con el municipio de Samaniego y el resguardo de El Sande y termina

ARTÍCULO 3. OBJETIVO GENERAL DEL SISTEMA DE DERECHO PROPIO - REGLAMENTO INTERNO. Establecer un marco normativo general y primario o fundante, que permita regular las conductas y actuaciones de la comunidad Indígena del Resguardo de Guachavés y sus instituciones, en asuntos de los comuneros, territorio, administración, gobierno propio y sistema de elecciones, a fin de garantizar equilibrio, armonía, autoridad, orden, unidad, solidaridad, convivencia, justicia y paz.

ARTÍCULO 4. DE LOS PRINCIPIOS GENERALES: Son principios orientadores del presente Sistema de Derecho Propio - Reglamento Interno.

- **Unidad:** Es la visión armónica, colectiva e integral de la comunidad donde se convive en una relación respetuosa entre hombres y mujeres, partiendo de la igualdad, la comprensión para la paz y el buen vivir de las comunidades. Las diferencias que existan deberán ser tratadas mediante la palabra y el diálogo en el marco del respeto, la tolerancia y la convivencia.
- **Justicia:** Forma de mantener el orden y el respeto de todo cuanto existe para la vida y la organización de la comunidad indígena del Resguardo de Guachavés. Su práctica es pública, oral, de sanación y corrección corporal, mental y espiritual para ejercer control y equilibrio social y natural según el Derecho propio y del Estado.
- **Autoridad:** Es el poder y la facultad emanados de la tierra y la comunidad que tienen nuestros indígenas para conservar la armonía y el equilibrio de una comunidad. Este Reglamento está encaminado a promover la justicia, el respeto y la obediencia para hacer cumplir los deberes y derechos de todos los comuneros. Es el gobierno propio conformado por los voceros o representantes de la comunidad para dinamizar, mantener, rescatar, fortalecer la identidad y el pensamiento propio.



- **Equilibrio:** Es la armonía que existe en la comunidad, representado por el respeto a la autoridad propia, a la naturaleza, al cosmos, a los comuneros según las tradiciones, cultura y autonomía.
- **Autonomía:** Capacidad para poder tomar decisiones en ejercicio de la autoridad; capacidad para pensar, sentir y actuar; capacidad de auto gobernarse, principio de organización y autoridad.
- **Identidad Cultural:** Es el derecho de la comunidad a mantener, reafirmar y reproducir sus formas organizativas, institucionales encaminadas a fortalecer y mantener los valores sociales y culturales.
- **La minga:** Es el trabajo mancomunado para el desarrollo de las principales actividades de beneficio comunitario.
- **Reciprocidad:** Principio de dar y recibir con justicia.
- **Solidaridad:** Es un valor o un sentimiento que une e integra a un pueblo o comunidad, donde sobresale la colaboración mutua para superar dificultades y necesidades.

ARTÍCULO 5. PRINCIPIOS BÁSICOS DE LA COMUNIDAD INDÍGENA: Son principios de la comunidad indígena los siguientes:

- No robar.** Es un principio basado en el respeto entre los miembros de la comunidad. Resalta la importancia de la lucha y el trabajo de cada uno; respeto al trabajo de los otros, los bienes, las cosas, el tiempo y los demás asuntos de los otros.
- No matar.** Resalta el valor fundamental y supremo de la vida; en particular la vida de cada persona y de la humanidad, de toda la vida natural, cultural y ambiental. Implica un mandato fundado en el respeto de los otros.
- No ser ocioso.** Se refiere a la importancia y al valor del tiempo y el trabajo. Para las comunidades, el trabajo también es un valor fundamental. Nos se concibe a un indígena sin trabajar. El trabajo diario dignifica y engrandece a la comunidad.
- Ser respetuoso.** Es un valor fundamental e integral que implica no afectar ni entrometerse en los espacios reservados de los demás. Significa permitir a los otros el desarrollo de sus actividades que desarrollan dentro del marco de la legalidad y la moralidad. Los demás son: las personas, la comunidad, la madre tierra, el cosmos, los lugares sagrados, los recursos naturales y a todo el orden natural.
- Ser responsable.** La responsabilidad entendida como la respuesta lógica a la confianza brindada por las personas o la comunidad. Es otro valor fundamental que se refleja en el en el buen vivir de la comunidad. Es responder por cada uno de nuestros actos asumiendo las consecuencias que ellos generen.
- No mentir:** La verdad de la palabra es lo que ha caracterizado a las comunidades indígenas y se refiere al compromiso que uno adquiere cuando manifiesta algo.



ARTICULO 6. DERECHOS COLECTIVOS, FUNDAMENTALES E INTEGRALES:

Los derechos colectivos de los pueblos indígenas son fundamentales e integrales, los hacen parte viva de la existencia de una comunidad o un pueblo. Entre ellos los más importantes son: Territorio, identidad cultural, autonomía, gobierno propio, consulta y concertación. El titular de estos derechos es la comunidad representada por el cabildo indígena.

ARTICULO 7. USOS Y COSTUMBRES FUENTE PRIMARIA: Los usos, costumbres y tradiciones propios de la comunidad indígena de Guachavés, son todas las prácticas culturales que por tradición se conservan en la comunidad indígena y que tienen que ver con la vida social, cultural, económica, política, espiritual y ambiental y que son la fuente primaria de este sistema de derecho propio y que se mantendrán vivas al interior del Resguardo en el tiempo y en el espacio.

ARTICULO 8. AMBITO DE APLICACIÓN PERSONAL: El presente Reglamento Interno se aplicará a todos los miembros de la comunidad indígena del Resguardo de Guachavés, que compartan territorio, justicia, usos y costumbres y que estén censados en el Libro de Empadronamiento "Censo". También se aplicará a los indígenas censados que por cualquier circunstancia se encuentren fuera del territorio del Resguardo. Igualmente se aplicará a todas las personas que por alguna circunstancia se encuentren dentro del territorio y/o resulten implicadas en alguna de las conductas aquí contempladas.

ARTICULO 9. APLICACIÓN DE NORMAS COMPLEMENTARIAS. En lo no contemplado en las normas consuetudinarias internas y el presente reglamento, se aplicarán las normas vigentes de la República de Colombia y normas internacionales en lo que sea pertinente.

CAPITULO III

DE LA COMUNIDAD

ARTICULO 10.- COMUNIDAD O PARCIALIDAD INDÍGENA: Es el grupo o conjunto de familias de descendencia nativa, que tiene conciencia de identidad y comparten valores, rasgos, usos y costumbres de su cultura; así como formas de gobierno, gestión, control social o sistemas normativos propios que la distinguen de otras comunidades, tengan o no título de propiedad, o que no puedan acreditarlos legalmente, o que sus Resguardos fueron sueltos, divididos o declarados vacantes.



ARTÍCULO 11. INDÍGENA: Son las personas originarias de este territorio con sus características, rasgos, valores y principios propios y además, se encuentran legalmente censadas en el libro de empadronamiento comparten territorio, autoridad, autonomía, leyes, usos y costumbres.

ARTICULO 12. COMUNERO: Es un miembro activo dentro de la comunidad y del Resguardo que vive dentro del territorio y cumple o comparte los usos y costumbres.

ARTICULO 13.- CABILDANTE: Indígena del resguardo que está prestando sus servicios a la comunidad como gobernador o como miembro de la Honorable Corporación.

ARTICULO 14.- ADOPTADOS: Son las personas que no son originarias de este territorio, no tienen apellidos ni características físicas propias de los habitantes de la comunidad indígena; pero que mediante un proceso propio se acogen a las leyes, normas, usos y costumbres de las comunidades Indígenas.

PARAGRAFO: Su reconocimiento e ingreso se lo hace mediante un acto administrativo motivado, previo cumplimiento de unos requisitos.

ARTICULO 15.- REQUISITOS PARA LA ADOPCION: Para ser adoptado como miembro de la comunidad indígena del resguardo de Guachavés, se tendrá en cuenta los siguientes requisitos:

- Haber vivido por más de 10 años dentro del resguardo, demostrando arraigo al territorio y su cultura.
- Demostrar un comportamiento aceptable de acuerdo a las normas internas y disposición de servicio.
- Tener parentesco familiar con algún miembro de la comunidad como esposa o esposo.
- No tener antecedentes penales con la justicia ordinaria
- Si es indígena se verificará los antecedentes ante la justicia interna de la comunidad de origen.
- Deberá sujetarse a la autoridad, los usos, costumbres y tradiciones de esta comunidad y al presente reglamento.
- Deberá comprometerse a pasar todas sus tierras (si es que tiene) a título de usufructo

PARAGRAFO: Si quienes son adoptados tienen o adquieren tierras, deben estar en disposición de pasarlas a propiedad colectiva en su totalidad al Resguardo Indígena.



ARTICULO 16. PROCEDIMIENTO PARA LA ADOPCION: Para la adopción se observará el siguiente procedimiento que lo desarrollará el comité de justicia y terminará con un acto administrativo motivado.

- Solicitud por escrito ante la autoridad propia.
- Revisión de cumplimiento de requisitos por parte del cabildo.
- Si es necesario se abrirá una etapa probatoria.
- Elaboración de Acto administrativo (Resolución) motivada de aceptación y constancia de inscripción en el Libro de Empadronamiento actual.
- Aplicación de usos y costumbres frente a la comunidad

ARTICULO 17. DERECHOS DE LAS PERSONAS ADOPTADAS: Las personas adoptadas tendrán todos los derechos colectivos e individuales como indígenas, excepto ser miembro del cabildo hasta cuando cumpla el tiempo estipulado como requisito.

PARAGRAFO 1: No podrá ser candidato ni elegido gobernador persona que haya sido adoptada dentro de la comunidad indígena, sino cumple diez (10) años de haber sido adoptado y presentar su respetivo acto administrativo de adopción.

PARAGRAFO 2: No podrá ser elegido como miembro de la Honorable Corporación persona que haya sido adoptada dentro de la comunidad indígena, sino cumple cinco (5) años de haber sido adoptado y presentar su respetivo acto administrativo de adopción.

PARAGRAFO 3: Toda persona que haya sido adoptada deberá presentar el acto administrativo por el cual fue aceptada como nuevo miembro de la comunidad indígena para reconocérsele y respetarle los derechos, caso contrario su adopción no tiene validez y tendrá que solicitar se inicie un nuevo proceso, así haya ocupado cargos dentro del cabildo.

ARTICULO 18.- ETNIA: Es un grupo humano caracterizado por su cultura en un espacio geográfico como el de los pueblos Indígenas, tribus o familias.

ARTICULO 19.- IDENTIDAD. Es el conjunto de rasgos físicos, atributos, valores y principios propios de un individuo o comunidad que los caracterizan y hacen diferente frente a los demás. El resguardo de Guachavés pertenece a la Etnia de los Pastos.



ARTICULO 20.- REQUISITOS PARA CENSARSE: Son requisitos para censarse en el Libro de Empadronamiento:

- Indígenas que tienen tierras de resguardo adjudicadas por el cabildo y no están inscritas en el libro de empadronamiento
- Niños que nacen en núcleo familiar indígena tienen el derecho de censarse en cualquier momento
- Pueden censarse jóvenes mayores de edad cuando sus padres están Censados y ellos no aparecen inscritos por algún motivo
- Adoptados que presenten el acto administrativo de adopción o reconocimiento y están dispuestos a cumplir con el presente reglamento interno
- Indígenas que por muchos años han abandonado el resguardo, a su regreso tienen el derecho a censarse
- Descendientes de nativos reconocidos por sus apellidos propios y características físicas.
- Compartir el pensamiento indígena.

PARAGRAFO 1: Personas que tienen título de adjudicación de tierras, solo pueden censarse cuando esos títulos tengan 10 años de vigencia.

PARAGRAFO 2: No se pueden censar a personas que pasan sus tierras a título de cabildo, con el único fin de ganar los derechos de las comunidades indígenas; tienen que seguir el proceso de adopción.

ARTICULO 21.- DEBERES DE LOS COMUNEROS: Son deberes de los comuneros del Resguardo Indígena de Guachavés:

- Censarse y actualizar sus datos en las oficinas del cabildo indígena de Guachavés cada año o cuando un nuevo miembro nace.
- Conservar, promover y difundir la identidad cultural a través de las diferentes manifestaciones artísticas, sociales, económicas y políticas.
- Contribuir al saneamiento del territorio mediante el traspaso de sus tierras de escritura a títulos de Resguardo.
- Participar activamente en los procesos electores
- Cuidar las parcelas que le han sido entregadas para su usufructo
- Participar activamente en las asambleas programadas por la Corporación del Cabildo Indígena,
- Asistir y contribuir con sus capacidades en las mingas programadas por el cabildo: mingas de pensamiento y mingas de trabajo comunitario.
- Trabajar la tierra para garantizar la autonomía alimentaria a través de la shagra.
- Acatar, aceptar y respetar las decisiones tomadas por su autoridad
- Aceptar los castigos y sanciones impuestos por su autoridad



**GRAN TERRITORIO DE LOS PASTOS
RESGUARDO INDÍGENA DE GUACHAVÉS
MUNICIPIO DE SANTACRUZ
NIT. 800217996-5**

- Participar activamente en las actividades que se programen en el resguardo
- Ayudar, promover, incentivar y apoyar a la conservación del territorio (medio ambiente)
- Es deber de los miembros del cabildo presentar informes periódicos a la comunidad de sus actividades realizadas, especialmente del manejo de recursos económicos
- Denunciar los hechos que afecten el bienestar de la comunidad
- Cuidar los bienes del resguardo y del cabildo
- Los demás que se estipulen por parte de las autoridades indígenas, el presente reglamento y las leyes de la república.
- Todo comunero o comunera que ha sido beneficiado(a) con proyectos sociales, comunitarios, vivienda, ambientales, productivos y otros; debe cumplir con los principios de reciprocidad y lealtad a su institución y comunidad

ARTICULO 22.- DERECHOS DE LOS COMUNEROS: Son derechos de los comuneros del resguardo indígena de Guachavés, los siguientes:

- Derecho a elegir y ser elegido de acuerdo al presente reglamento.
- Derecho a beneficiarse de los planes, programas y proyectos que se desarrollen en la comunidad.
- Todo comunero tiene derecho a ser tratado en igualdad de condiciones y oportunidades, siempre y cuando cumpla sus deberes y obligaciones ante la comunidad y autoridades propias.
- Derecho a ser juzgado, sancionado y castigado por su propia autoridad
- Derecho a presentar sus quejas y reclamos ante las instituciones propias cuando considere necesario y conveniente, de acuerdo al presente reglamento.
- Derecho a poseer y a usufructuar un lote de terreno dentro del resguardo indígena de Guachavés, sin atropello de nadie.
- Las personas con discapacidad tendrán atención prioritaria por las instituciones internas y externas.
- Los comuneros indígenas que sufran de algún tipo de discapacidad ya sea física o psicológica, quedan bajo la responsabilidad de las autoridades del Cabildo Indígena de manera transitoria, si es que estas personas no tienen ningún familiar que se responsabilice.
- Los demás derechos que se estipule en el presente reglamento, los usos y costumbres y las leyes nacionales e internacionales.

CAPITULO IV DEL TERRITORIO

ARTICULO 23.- TERRITORIALIDAD: Es el espacio natural, cosmogónico y socio-cultural sagrado, donde compartieron su palabra, sabiduría y el que hacer milenario nuestros ancestros, se genera la vida de todo ser vivo, lo que permite desarrollar la



cultura del pueblo indígena, los usos, costumbres, tradiciones, identidad, mitología, autonomía, conservación de paramos, montes, bosques y nacimientos de aguas.

ARTÍCULO 24.- DEFINICIÓN DE RESGUARDO INDÍGENA: Son las tierras que milenariamente han sido poseídas por nuestros mayores de forma colectiva y que actualmente son reconocidas por el estado mediante un título que puede ser Colonial o Republicano, en el que se desarrolla una comunidad: La constitución política en sus artículos 63 y 329 establece que las tierras de los Resguardos Indígenas son inalienables. Imprescriptibles e inembargables.

ARTICULO 25.-TERRITORIO INDÍGENA: Son las áreas poseídas en forma regular o permanente por una comunidad, parcialidad o grupo Indígena y aquellas que, aunque no se encuentren poseídas en esa forma constituyen el ámbito tradicional de sus actividades sociales, económicas y culturales.

ARTICULO 26. AREA DEL TERRITORIO DE GUACHAVES: Son todas las tierras del Resguardo de Guachavés, enmarcadas o que están comprendidas dentro del Título Colonial protocolizado mediante Escritura 641 de 1904, registrada en la notaria primera del circuito de Tuquerres, cuyos límites se encuentran en el Artículo 2 del presente reglamento.

ARTÍCULO 27. CARACTERISTICAS DEL TERRITORIO: Todo lote de terreno del resguardo de Guachavés, hace parte de la propiedad colectiva y por ley natural es inembargable, imprescriptible y no enajenable y se encuentra bajo el dominio de la autoridad propia del Cabildo indígena del Resguardo de Guachavés.

ARTÍCULO 28. TITULARIDAD DE LAS TIERRAS DE RESGUARDO: Las tierras del resguardo de Guachavés, deben ser entregadas a título de usufructo a cualquier miembro de la comunidad indígena del Resguardo de Guachavés, de acuerdo a los usos, costumbres, al presente reglamento y la disponibilidad de tierra.

ARTICULO 29. SUCESION: Cuando un comunero fallece, las tierras poseídas o tituladas a éste serán repartidas entre sus descendientes. Si no tiene descendientes, se adjudicará a los familiares más cercanos primando los lazos de consanguinidad y afinidad de generación en generación. Se tendrá en cuenta a las personas que hayan visto por el usufructuario los últimos años de su vida y realicen su funeral y entierro.



ARTICULO 30. CEDENCIA: Es la entrega que hace un indígena del derecho de usufructo sobre un predio de resguardo o un predio de propiedad privada, con el fin de que sea adjudicada por la autoridad a un miembro del núcleo familiar u otro indígena activo

PARAGRAFO: Cuando el predio es de propiedad privada, se debe anexar copia del documento de posesión, con el fin de verificar la propiedad y verificar los límites correspondientes.

ARTICULO 31.- ADJUDICACIÓN DE TIERRAS: Es la entrega de una parcela de tierra que hace el Cabildo a un miembro o familia de la comunidad Indígena para que sea usufrutuada y pueda sobrevivir

ARTICULO 32.- DERECHO DE ADJUDICACIÓN: Tienen derecho a que se le adjudique las tierras de resguardo, solo a los descendientes de familias indígenas que viven en el territorio y han cumplido con los deberes de la comunidad indígena del resguardo de Guachavés.

ARTICULO 33.- PERDIDA DEL DERECHO DE ADJUDICACIÓN: Perderán el derecho de adjudicación en los siguientes casos:

- Indígenas que hayan vendido, arrendado e hipotecado tierras de resguardo adjudicadas en años anteriores (Sanción)
- Indígena que no comparta ni acate las decisiones de la autoridad propia
- Indígenas que hayan sido sancionados o castigados por la autoridad propia
- Indígenas que hayan sido condenados por la justicia ordinaria
- Indígenas que causen el desorden dentro de la comunidad
- Indígenas que no estén a paz y salvo con la comunidad y el cabildo
- Indígenas que hayan irrespetado a la autoridad
- Indígenas que no tengan la cultura de conservación de los recursos naturales
- Indígenas que se hayan prestado para aliarse con personas ajenas a la comunidad indígena de Guachavés, para la explotación de recursos naturales.
- Indígenas que voluntariamente se hayan ausentado durante 10 años o más del territorio o la comunidad.

ARTICULO 34- REPARTICIÓN DE TIERRAS RESGUARDO: Este proceso se desarrollará en los siguientes casos

1. Cuando el Cabildo tenga tierras disponibles de uso colectivo, podrá asignarlas a los Indígenas que amerite entregarle



2. Cuando el cabildo compre tierras de propiedad privada para sanear el territorio.
3. Cuando el cabildo recupere tierras que han sido abandonadas por sus usufructuantes.
4. Cuando el cabildo expropie tierras que están siendo mal utilizadas
5. Cuando el usufructuario muera y no haya herederos, el cabildo podrá disponer de ellas para adjudicarlas a otros indígenas que no posean.
6. Cuando los usufructuarios hacen entrega voluntaria de sus tierras.

ARTICULO 35.- PROCEDIMIENTO PARA LA ADJUDICACIÓN DE TIERRAS DE RESGUARDO: Se surtirán los siguientes pasos:

- Solicitud por escrito ante la autoridad tradicional (cabildo) por parte de los interesados.
- Después de hecha la petición de adjudicación, el Cabildo tendrá un tiempo de 30 días para analizar y estudiar el caso y dar respuesta al interesado.
- Se hace una publicación de la solicitud para determinar si hay algún tipo de impedimento.
- Posteriormente el señor gobernador junto con la Honorable Corporación hacen una inspección ocular con el fin de situar los predios con sus respectivos linderos y colindantes; y si no hay inconvenientes se realizara la entrega del respectivo lote o retazo. La entrega tiene validez cuando hace presencia el señor gobernador como autoridad máxima, los Regidores quienes son testigos ineludibles, los Alguaciles que son quienes purifican al beneficiado, el Secretario quien elabora los documentos de posesión, los Indígenas beneficiarios del bien y los peritos
- Cuando el predio es para un solo usufructuario no hay necesidad de hacer repartición y se sigue los linderos del documento anterior
- Cuando el predio es para repartirlo y entregarlo a varios herederos, el cabildo tiene la obligación de realizar la repartición en partes iguales teniendo en cuenta valores como calidad de la tierra, topografía, fuentes de agua, bosques, etc. Cuando hay mutuo acuerdo entre los herederos, se respetará la decisión de los padres y el cabildo hará cumplir esta decisión. En caso de que no haya acuerdo entre los herederos, el cabildo hará las partes de forma equitativa y la asignación se realizara por medio de sorteo.
- Después de hacer la repartición a cada uno de los herederos el cabildo como autoridad propia, procede a hacer la entrega formal a cada beneficiario ceremoniando con las palabras que el Gobernador repite en cada evento así: "El Cabildo Indígena del Resguardo de Guachavés, administrando autoridad y



**GRAN TERRITORIO DE LOS PASTOS
RESGUARDO INDÍGENA DE GUACHAVÉS
MUNICIPIO DE SANTACRUZ
NIT. 800217996-5**

justicia conforme al Derecho Mayor, la Constitución Política de Colombia, el Convenio 169 de la OIT, las Leyes, el Reglamento Interno, los Usos y Costumbres, confiere la posesión real y material del predio denominado (nombre de la vereda o el lugar) a los Indígenas N.N. para que lo trabajen y con sus frutos se mantengan personalmente y su familia; quedan con la obligación de prestar toda clase de servicios que el Cabildo le ordene y queda totalmente prohibido arrendar, hipotecar ni vender y si ustedes cometen estos delitos será quitada la parcela y entregada a otro Indígena que no tenga". Después de estas palabras el señor gobernador concede permiso al señor alguacil para que haga la purificación a cada uno de los herederos repitiendo las siguientes palabras "no podrás vender, arrendar ni hipotecar es para el usufructo de la familia" y por cada palabra que pronuncia le da un fuetazo al que recibe. Con esto se termina la diligencia y se queda a responsabilidad del señor secretario del cabildo para elaborar los documentos y proceder a firmarlos por todos los que intervienen (Gobernador, Regidores, Secretario, alguaciles, peritos y adjudicatarios).

PARAGRAFO 1: En caso de que el señor gobernador, regidores y alguaciles principales no puedan asistir, autorizaran al gobernador, regidores y alguaciles suplentes para realizar este proceso.

PARAGRAFO 2: Comunero que reciba parcela de resguardo tiene la obligación de dejar una parte para reforestar.

PARAGRAFO 3: El Cabildo llevara un libro registrador de adjudicaciones con el fin de llevar un control de los predios entregados y de los indígenas beneficiados.

PARAGRAFO 4: En un proceso de repartición de tierras, serán premiados con mayor área de usufructo, los hijos que cuiden o hayan cuidado a sus padres.

ARTICULO 36- DOCUMENTO DE ADJUDICACIÓN: Las tierras de Resguardo son adjudicadas a los comuneros mediante un documento realizado por el Cabildo, el cual garantiza el derecho al usufructo y tiene vigencia hasta que el comunero muera o el voluntariamente haga entrega a los herederos o las devuelva al Cabildo.



CAPITULO V

USOS Y COSTUMBRES

A. JUSTICIA, FALTAS Y CASTIGOS.

ARTÍCULO 37.- JURISDICCION ESPECIAL INDIGENA. - Es la facultad ancestral, natural, cultural, milenaria y constitucional que tienen las Autoridades indígenas de administrar justicia en todas las ramas del derecho, en forma autónoma, integral e independiente de acuerdo con los usos y costumbres ancestrales, las normas y procedimientos propios y la legislación indígena especial vigente dentro de su ámbito territorial.

ARTICULO 38- FALTAS: Se consideran faltas que ameritan sanciones y castigos las siguientes:

1. Desobediencia a la Autoridad del Cabildo, (no colabore en mingas, trabajos que se realicen en el Resguardo), a los padres, a la autoridad no propia.
2. Irrespeto a la Asamblea General, a la Autoridad del Cabildo, a la Autoridad no propia, a los padres y a la familia.

PARAGRAFO. Se considera como irrespeto: la embriaguez, cuando en una reunión no se descubra la cabeza, que se ría, quien se salga del salón sin haberse terminado la reunión o sin permiso, comer en reunión, llegar pasado la hora.

3. Irrespeto a los símbolos propios del Cabildo (acial, varas de justicia, etc.).
4. Destrucción de los recursos naturales renovables y no renovables.
5. Comuneros que abandonen las parcelas de resguardo sin comunicar al cabildo
6. Comuneros que vendan, arrenden e hipotequen tierras de resguardo
7. Daños o perjuicios entre comuneros o de un comunero a un Indígena.
8. Inasistencia a reuniones de los miembros de la Honorable Corporación.
9. Tomarse la palabra sin permiso del Gobernador.
10. Salir de una asamblea sin permiso
11. Hablar dos o más personas al mismo tiempo.
12. Hacer mal uso de los bienes o recursos de la comunidad o el cabildo
13. Desacatar las decisiones del cabildo y la asamblea
14. No apoyar los procesos sociales, culturales, ambientales y políticos que el cabildo adelante.
15. Tomarse el nombre del cabildo o la comunidad para beneficio propio.



GRAN TERRITORIO DE LOS PASTOS
RESGUARDO INDÍGENA DE GUACHAVÉS
MUNICIPIO DE SANTACRUZ
NIT. 800217996-5

16. Recibir o dar dinero o dadivas para beneficiar a candidatos a cargos de elección del cabildo.
17. En procesos de elección de autoridades propias hacer campaña para
18. beneficiar a un candidato
19. Hacer campaña para conseguir el respaldo como candidato a gobernador del cabildo
20. Pagar transporte para que los comuneros salgan a votar en elección de gobernador
21. Publicar documentos y videos en las redes sociales para empañar la imagen de un comunero o de la autoridad.
22. Atentar contra la integridad física, moral y psicológico de un comunero
23. Abuso de autoridad por el gobernador o un miembro de la honorable corporación
24. Adquirir deudas a nombre del cabildo
25. Tener deudas en dinero con personas naturales por el manejo de programas.
26. No cumplir con los cargos asumidos.
27. Cuando un comunero ha sido elegido a un cargo de elección popular (consejo) y se desliga de los principios e intereses de la comunidad indígena para respaldar otras propuestas.
28. Causar el desorden al interior del resguardo
29. Vender los bienes que hayan sido adquiridos por medio de proyectos gestionados por el cabildo, especialmente viviendas.

ARTICULO 39. CASTIGOS O SANCIONES: Comunero que cometa una falta de cualquier índole será sancionado o castigado de la siguiente forma:

1. Si la falta es leve, se castiga con Acial en Asamblea General de acuerdo a los Usos y Costumbres
2. Si la falta es considerada como media se castiga con trabajos en beneficio del Cabildo o de otro comunero y reparación de la falta
3. Si la falta es considerada como grave se castigará con calabozo, trabajo comunitario, perdida derecho temporalmente o exclusión definitiva de la comunidad Indígena.
4. Si la falta es muy grave (violación, homicidio, terrorismo, secuestro, extorción, maltrato familiar, venta y distribución de alucinógenos, quien atente contra la naturaleza, etc. y que el cabildo aun no esté en condiciones de sancionar, se apoyará en la justicia ordinaria mediante acuerdos para que sean juzgados y sancionados de acuerdo a la jurisdicción ordinaria, cuya pena será pagada en el



lugar que las partes determinen.

PARAGRAFO 1: Comunero que no acepte o no se someta al castigo impuesto por la Autoridad y/o la Comunidad Indígena, será destituido y perderá todos los derechos de los Indígenas de este Resguardo, según la falta cometida y su caso será remitido a la justicia ordinaria con todos los avances del debido proceso.

PARAGRAFO 2: Para la aplicación de los castigos y sanciones, el cabildo deberá elaborar su manual de Justicia Propia.

B. ELECCIONES

ARTÍCULO 40 ELECCIONES: En el Resguardo Indígena de Guachavés, cada año se realiza un proceso de elección, con el fin de elegir Gobernadores y Miembros de la Honorable Corporación teniendo en cuenta la Ley 89 de 1890, el Reglamento Interno y los usos y costumbres.

ARTICULO 41. DERECHO DE ELEGIR Y SER ELEGIDO: Todo comunero mayor de 18 años tiene derecho a elegir y ser elegido a cualquier cargo dentro del Cabildo siempre y cuando cumpla con los requisitos y normas establecidas en el presente reglamento interno del Cabildo.

ARTICULO 42. ASPIRANTES A CARGOS DE ELECCIÓN: Los aspirantes a cargos de Gobernador o miembros de la Honorable Corporación, deben salir de una asamblea programada con anterioridad a la elección y por mayoría de votos de los comuneros; además, tener aceptación por la comunidad.

ARTICULO 43. DURACIÓN DE LAS ELECCIONES: Las elecciones para Gobernador y miembros de la Honorable Corporación tendrán una duración de 8 horas, comenzando a las 8:00 a.m. y terminando a las 4:00 p.m. de la fecha programada.

ARTICULO 44. SEDE DE ELECCIONES: Las elecciones para Gobernador y miembros para la Honorable Corporación, se realizarán en la casa del Cabildo indígena de Guachavés.



ARTICULO 45. VEEDORES Y JURADOS DE LAS ELECCIONES: Las elecciones para Gobernador se realizarán con presencia de Autoridades Tradicionales de otros Resguardos pertenecientes a la etnia de los Pastos o mayores del mismo resguardo. En cada mesa de votación habrá dos (2) jurados, quienes serán estudiantes Indígenas de la Universidad de Nariño avalados por su cabildo Universitario o de otras universidades.

ARTICULO 46. RESTRICCIONES EN EL VOTO: Son las siguientes:

1. Todo comunero que se presente en estado de embriagues no podrá votar.
2. Comunero o comuneros que estén sancionados por parte de la autoridad propia.
3. Comunero que no haya asistido como mínimo a 5 reuniones ordinarias en el año, no podrá votar. (definir con la comunidad).
4. Comunero que no haya asistido a 1 minga como mínimo en el año, no podrá votar. (definir con la comunidad).
5. Comunero que no esté a PAZ Y SALVO con el Cabildo o con otros comuneros no podrá votar.
6. Comunero que haya perdido los derechos temporalmente, no podrá votar.
7. Comunero o comuneros a quienes se les haya comprobado que recibieron dinero o dadas para respaldar a un candidato, no pondrán votar
8. Comunero o comuneros que anden hablando mal del cabildo o de los candidatos, no podrán votar
9. Comuneros que tengan problemas judiciales con la autoridad ordinaria.

ARTICULO 47. PERSONAS DE APOYO: En el futuro en cada vereda perteneciente al Resguardo, se elegirá y/o nombrará un Regidor quien actuará como persona de apoyo del Cabildo.

ARTICULO 48. PROHIBICIONES: El día de elecciones para Gobernador y miembros de la Honorable Corporación, queda prohibido el pago o suministro de transporte a los comuneros que salgan a votar por los aspirantes a los diferentes cargos.

ARTICULO 49. SUMINISTROS: El día de elecciones para Gobernador y miembros de la honorable Corporación, el Cabildo Indígena se encargará de suministrar un refrigerio a los comuneros votantes.



ARTICULO 50. SUSPENSIÓN DE ELECCIONES: Se suspenderá el proceso electoral de gobernador en el momento que no haya garantías para continuar, debido al desorden causado por los comuneros que impiden continuar con el proceso.

PARAGRAFO: Sera elegido gobernador quien hasta ese momento tenga el mayor número de votos siempre y cuando haya pasado la mitad del tiempo programado, caso contrario se suspenderán y se programará nuevas elecciones en fecha que será definida por el cabildo vigente.

C. OTROS

ARTICULO 51. REUNIONES: Las reuniones Ordinarias se realizarán cada 15 días, en la casa de la casa del cabildo, los días domingos, a partir de las 11:30 de la mañana y con una duración de 3 horas. Las extraordinarias se llevarán a efecto cuando el señor Gobernador y la Honorable Corporación lo consideren pertinente

ARTICULO 52. PRESENTES EN LAS REUNIONES: Las reuniones ordinarias y/o extraordinarias se desarrollarán con la presencia del Señor Gobernador, Regidores, Alguaciles, Secretario y comunidad.

ARTICULO 53.- CENSO: En el Cabildo Indígena de Guachavés, cada año se realizara una actualización del censo poblacional, el cual inicia el primero (1) de febrero y termina el treinta y uno (31) del Marzo; con el fin de registrar los nuevos comuneros que han nacido durante el año o aquellos comuneros que cumplan con los méritos y requisitos y que voluntariamente quieran censarse; lo mismo, que para dar de baja a los comuneros que han muerto durante el año, hayan sido destituidos, aquellos que voluntariamente deseen retirarse. y aquellas que por más de tres años han abandonado el resguardo. El censo se cerrará a las 4:00 de la tarde mediante una Resolución motivada.

PARAGRAFO: Los retiros y exclusiones se harán en asamblea ordinaria



ARTICULO 54. SÍMBOLOS DEL CABILDO: Son Símbolos del Cabildo. (ubicarlo arriba)

1. Las varas de Justicia y los aciales.
2. La bandera que tiene los colores, café, rojo, verde y una franja blanca con el sol de los pastos.
3. Existirá un escudo alusivo a los usos y costumbres del Cabildo.
4. El himno del Resguardo.

ARTICULO 55. FESTIVIDADES: El Cabildo Indígena de Guachavés, cada año celebrará una fiesta religiosa en honor a su patrono San Juan Bautista, la cual se efectuará en el mes de junio.

También se celebrarán las fiestas tradicionales del maíz y la identidad, la cual se desarrollará posterior a las fiestas religiosas

PARÁGRAFO: Cuando por algún motivo de fuerza mayor no se pueda hacer en la fecha programa, mediante Resolución motivada se podrá cambiar de fecha.

ARTICULO 56.- TRABAJOS: Los trabajos que se desarrollen en el Resguardo, sean comunitarios o para bien de un comunero, se adelantaran mediante mingas.

ARTICULO 57.- INCENTIVOS: Comunero o comuneros que se distingan en el año por asistir a reuniones, mingas, trabajos, capacitaciones, etc. serán tenidos en cuenta en los diferentes programas y proyectos que el Cabildo adelanta en pro del beneficio de la Comunidad Indígena.

CAPITULO VI

ESTRUCTURA ORGANICA, FUNCION ADMINISTRATIVA Y CONTROL EXTERNO DEL RESGUARDO INDIGENA DE GUACHAVÉS.

ARTICULO 58. DEFINICIÓN DEL CABILDO: Cabildo Indígena representa la autoridad propia de la comunidad; es una entidad pública de carácter especial, cuyos integrantes son miembros de la comunidad Indígena, elegidos y reconocidos por esta, con una organización sociopolítica tradicional, cuya función es representar legalmente a la comunidad, ejercer la autoridad y realizar las actividades que le atribuyen el Derecho Mayor, la Ley Natural, la Ley de Origen, las leyes, sus usos, costumbres y el reglamento interno de cada comunidad.



ARTICULO 59. AUTORIDAD TRADICIONAL: Las autoridades tradicionales son los miembros de una comunidad Indígena que ejercen o ejercieron, dentro de la estructura propia de la respectiva cultura, un poder de organización, gobierno, gestión o control social o político.

ARTICULO 60.- DE LA ESTRUCTURA DE LA CORPORACION DEL CABILDO:

El Cabildo Indígena de Guachavés, Municipio de Santacruz, tendrá la siguiente estructura orgánica administrativa

1. La asamblea general conformada por los comuneros que están debidamente registrados en el libro de empadronamiento, que asisten a las asambleas y con los derechos colectivos vigentes.
2. El gobernador, quien representa la autoridad administrativa dentro del resguardo y actúa como representante legal de la comunidad.
3. Corporación Indígena conformada por Regidores y Alguaciles

La sede oficial del Cabildo es el pueblo de Guachavés y su recinto es la casa del Cabildo.

ARTICULO 61. NATURALEZA DEL CARGO DE GOBERNADOR: En el Resguardo Indígena de Guachavés, habrá un Gobernador elegido popularmente quien ejercerá la autoridad político-administrativa y será el representante legal de la Comunidad Indígena.

ARTICULO 62. CANDIDATOS A GOBERNADOR: Los dos candidatos a gobernador del resguardo indígena de Guachavés, serán escogidos el último domingo del mes de noviembre de cada año de varios indígenas que serán postulados por la comunidad y el cabildo vigente, previa concertación con los exgobernadores y que comparten los principios de AICO.

ARTICULO 63.- ELECCIÓN: El Gobernador será elegido por voto popular abierto por la mayoría de comuneros que hacen presencia el día de elecciones y en la fecha correspondiente al segundo domingo del mes de diciembre de cada año.

El candidato que saque la mayoría de votos será el gobernador principal y quien saque la segunda votación será el gobernador suplente.



PARAGRAFO: Los candidatos a gobernador no pondrán ser propuestos por familiares o grupos políticos contrarios al pensamiento indígena y por comuneros inhabilitados, sancionados o inactivos.

ARTICULO 64.- PERSONAL DE APOYO: Para desarrollar este proceso de elección dentro del resguardo se tendrá un personal de apoyo representados así: Dos (2) veedores, preferiblemente autoridades de otros resguardos del pueblo de Los Pastos y dos (2) jurados por cada mesa, que en lo posible deben ser estudiantes indígenas de la universidad de Nariño y otras universidades.

ARTICULO 65.- POSESION DEL GOBERNADOR: La posesión del señor gobernador, junto con la honorable corporación, será el primero de enero siguiente a la fecha de la elección por un periodo de 1 año, con posibilidad de ser elegido para 1 periodo más.

ARTICULO 66. REQUISITOS Y/O CALIDADES: Para ser elegido Gobernador del resguardo indígena de Guachavés, se requiere:

1. Comunero nacido en el Resguardo o haber residido en el respectivo durante 10 años anteriores a la elección.
2. Ser miembro activo de la Comunidad (participado en mingas, reuniones ordinarias y otros trabajos que el cabildo haya adelantado) y tener aceptación por la comunidad
3. Haber sido miembro activo de la Honorable Corporación del Cabildo por un periodo no menor de 4 años.
4. Estar a paz y salvo con el cabildo y la comunidad.
5. No haber traicionado a la comunidad Indígena, al movimiento de autoridades indígenas de Colombia - AICO, violado el reglamento interno y quien se haya vinculado o respaldado a otros movimientos o partidos políticos diferentes al pensamiento indígena sin consultar con su autoridad.
6. Que tenga tierra de resguardo o esté dispuesto a un proceso de sedencia.
Debe tener un buen proceso dentro del resguardo.
7. Las personas que han sido adoptados dentro de la comunidad indígena y se encuentren censados en el libro de empadronamiento, podrán ser candidatos cuando hayan cumplido diez (10) años del proceso de adopción y de servicio, previa presentación del documento que los acredita como adoptados.



ARTÍCULO 67. INHABILIDADES PARA SER CANDIDATO A GOBERNADOR: No podrá ser designado como candidato ni elegido como Gobernador, quien:

1. Quien se postule por iniciativa propia, por autoridades o grupos políticos y por personas que no compartan los principios del movimiento AICO.
2. Quien haya hecho campaña para tener respaldo político al cargo de gobernador, seis (6) meses antes de la escogencia de candidatos.
3. Haya sido privado a pena privativa de la libertad 5 años anteriores a su elección por la justicia ordinaria o por la justicia propia.
4. Se halle en procesos judiciales o haya sido sancionado o castigado por la Autoridad y/o Comunidad Indígena.
5. Quien no haya demostrado transparencia en el manejo de recursos económicos, no haya demostrado equidad, honestidad, solidaridad, eficacia y no esté a PAZ Y SALVO con el Cabildo.
6. Quien haya causado el desorden al interior de la comunidad en eventos electorales.
7. No ocupar cargo público al momento de ejercer como Gobernador.
8. Quien haya atentado contra la dignidad física y moral de la comunidad indígena, del cabildo o de los candidatos a la Gobernación.
9. No podrá ser candidato ni gobernador quien este desempeñando el cargo de concejal del municipio.
10. Quien haya vendido, arrendado e hipotecado las tierras de usufructo colectivo sin consentimiento de la autoridad del cabildo
11. Quien haya traicionado al cabildo y su comunidad.
12. Quien haya abandonado sin justificación y sin comunicación cargos dentro de la corporación del cabildo en años anteriores.
13. Los indígenas adoptados no podrán ser candidatos a gobernador sino cumplen con los diez (10) años de adopción
14. Ocupar el cargo de concejal del municipio y gerente de la IPS al momento de la elección.
15. Ser concejal del municipio al momento de la elección
16. Que no comparta el pensamiento religioso con la mayoría de la comunidad.

ARTÍCULO 68. FUNCIONES DEL GOBERNADOR: El Gobernador del resguardo indígena de Guachavés, ejercerá las funciones que le asigne la comunidad Indígena basándose en los usos y costumbres, la constitución, derecho mayor, convenios internacionales, la ley y el presente reglamento interno.



**GRAN TERRITORIO DE LOS PASTOS
RESGUARDO INDÍGENA DE GUACHAVÉS
MUNICIPIO DE SANTACRUZ
NIT. 800217996-5**

Además de las funciones anteriores, el gobernador tendrá las Siguietes.

1. Administrar el territorio, la educación, la salud, la justicia y los recursos económicos.
2. Presentar oportunamente el presupuesto de rentas y gastos a la Honorable Corporación para su estudio, análisis y aprobación teniendo en cuenta la participación de la comunidad.
3. En conjunto con la corporación aceptar la renuncia o conceder licencia a los miembros de la Honorable Corporación.
4. Conservar el orden público en el Resguardo de conformidad con los usos, costumbres y la ley.
5. Trabajar en concertación con las autoridades del orden Municipal, Departamental y Nacional cuando éstas requieran de su apoyo e intervención.
6. Dirigir la acción administrativa del Resguardo en conjunto con la
7. corporación, asegurar el cumplimiento de las funciones y la prestación de los servicios.
8. Ordenar los gastos del presupuesto de transferencias de la Nación, celebrar contratos y/o convenios con entidades del estado y/o internacionales
9. Adelantar acciones encaminadas a mantener y conservar la identidad, la cultura, el medio ambiente, la producción económica, el territorio, los usos y costumbres de la comunidad del Resguardo.
10. Informar sobre el desarrollo de su gestión a la Honorable Corporación y a la Comunidad Indígena oportunamente.
11. Firmar los documentos de repartición y adjudicación de tierras en conjunto con los demás miembros del cabildo.
12. Comisionar a los Indígenas en las diferentes actividades comunitarias que se programen en la parcialidad del Reguardo.
13. Presidir todas las reuniones que se realice con la comunidad.
14. Es obligación del Gobernador saliente entregar al entrante inventario, rendir informe financiero detallado de todas las pertenecías del Cabildo y realizar un empalme de su gestión a la comunidad.
15. Encaminar acciones que favorezcan a los pobres dentro de los más pobres de esta comunidad.
16. Permitir la descentralización del ejercicio de la gobernabilidad en los miembros del cabildo de acuerdo al plan de vida, los planes, programas, proyectos.
17. Y las demás que le otorgue la comunidad basándose en los usos y costumbres.



PARAGRAFO: Todas las acciones y funciones que el gobernador quiera adelantar dentro de su territorio en bien de su comunidad, deben ser consultadas y aprobadas por los exgobernadores de este resguardo que comparten los principios del movimiento de autoridades indígenas de Colombia – AICO

ARTÍCULO 69. POSESIÓN Y JURAMENTO: El gobernador tomara posesión de su cargo ante el cabildo cesante y en presencia del señor Alcalde presentando su respectivo juramento.

PARAGRAFO 1: La posesión del gobernador y de los demás miembros del cabildo se harán de acuerdo a los usos y costumbres.

PARAGRAFO 2: El lavado y purificación de las varas de justicia se realizará en los diferentes sitios sagrados del resguardo, al siguiente sábado de la posesión.

ARTÍCULO 70- NULIDAD DE ELECCIÓN: El comunero elegido como Gobernador del resguardo indígena de Guachavés, podrá ser anulado su cargo cuando se le compruebe:

1. Compra de Votos para ser elegido.
2. Dativas a los electores para beneficiar su candidatura.
3. Engaños a los electores para beneficiar su candidatura.
4. Promesas a los electores para beneficiar su candidatura
5. Difamación del otro candidato a gobernador.
6. Se compruebe que está apoyando y fortaleciendo a otros movimientos y partidos políticos tradicionales.
7. Violación a cualquier Artículo de este Reglamento Interno.
8. Se le compruebe que años anteriores haya respaldado movimientos o partidos tradicionales.
9. Se le compruebe la doble militancia.
10. No posesionarse del cargo dentro del primer mes del año (enero)

PARÁGRAFO: La nulidad de elección se realizará antes de su posesión y por el cabildo cesante en acompañamiento de los exgobernadores.



ARTÍCULO 71. CAUSALES PARA ABANDONAR EL CARGO DE GOBERNADOR: Son causales para abandonar el cargo de gobernador las siguientes:

1. La muerte.
2. Renuncia aceptada.
3. Incapacidad física.
4. Destitución.
5. Por enfermedad y que sea soportada mediante certificación médica

PARAGRAFO: En caso de darse cualquier numeral anterior asumirá automáticamente el gobernador suplente el cargo del principal.

ARTÍCULO 72. CAUSAS TEMPORALES PARA AUSENTARSE DEL CARGO DE GOBERNADOR DEL RESGUARDO: Son causas temporales para ausentarse del cargo de Gobernador las siguientes:

1. Permisos para separarse le cargo temporalmente.
2. Ausencia forzada involuntaria.
3. Suspensión temporal en el desempeño de sus funciones.
4. Licencia superior a 1 mes.

ARTÍCULO 73. RENUNCIAS, PERMISOS Y LICENCIAS: La renuncia, licencia o permiso para separarse transitoriamente del cargo de gobernador, se procede cuando él en forma escrita manifiesta su voluntad de hacer dejación del cargo transitoria o definitivamente como tal. La renuncia, permiso o licencia deberá ser presentada por escrito ante la corporación y Comunidad Indígena para ser analizada y tomar la decisión al respecto.

ARTÍCULO 74. CAUSALES DE DESTITUCIÓN: Son causales de destitución del gobernador del resguardo las siguientes:

1. Cuando la justicia ordinaria haya proferido sentencia condenatoria de carácter penal debidamente ejecutoriada, no se tendrán en cuenta procesos penales que sean defendiendo los derechos de la comunidad y el territorio.
2. Falte a tres (3) reuniones consecutivas de carácter ordinario o extraordinario sin ningún tipo de permiso o haya acumulado 10 faltas en el en su periodo de elección.
3. Cuando se compruebe el mal manejo de los recursos económicos de la comunidad en beneficio propio o de particulares.



4. No tome correctivos en el momento oportuno y ponga en riesgo el territorio, la autoridad, la autonomía y los derechos colectivos de la comunidad.
5. Exceso de abuso de Autoridad.
6. Cuando se le compruebe que esta aliado y respaldando propuestas, proyectos y acuerdos políticos con movimientos y partidos tradicionales

PARAGRAFO: La destitución o suspensión se realizará mediante un acto administrativo respetando su debido proceso realizado por el cabildo, la comunidad y autoridades mayores.

ARTÍCULO 75. CAUSALES DE CASTIGOS: El Gobernador será castigado en los siguientes casos.

1. No asista a una reunión ordinaria sin debida justificación.
2. Cuando se presente en estado de embriaguez ante la comunidad.
3. Cuando llegue tarde a reuniones programadas o actos públicos.
4. Cuando no acate las leyes, normas, usos y costumbres que rigen al Resguardo.
5. No participe en las mingas.
6. No haya claridad en el manejo de los recursos económicos.
7. Cuando no de participación a la honorable corporación y exgobernadores en la toma de decisiones de carácter importante
8. Cuando no aplique la justicia a sus comuneros
9. Cuando permita el desorden en asambleas u actos públicos.

Conformar la figura de consejo de mayores al cual se le debe construir su manual de funciones.

ARTICULO 76. DESIGNACIÓN: La comunidad en Asamblea General para los casos de causales de destitución o suspensión, la asamblea ordenará al Gobernador suplente asumir el Cargo de gobernador y cumplir con las funciones del titular y asumirá el cargo de Gobernador suplente el regidor 1 principal.

CAPITULO 2. DE LA HONORABLE CORPORACIÓN INDÍGENA

ARTICULO 77. En el resguardo habrá una corporación administrativa, cuyos miembros, serán elegidos popularmente para un periodo de 1 año, que se denominará CORPORACIÓN INDÍGENA y estará conformada por 12 comuneros distribuidos de la siguiente manera:



- a. 6 Regidores.
- b. 6 Alguaciles.

PARAGRAFO: Habrá un secretario quien no hará parte del cabildo y será nombrado por el señor Gobernador electo, quien tendrá voz, pero menos voto en las decisiones trascendentales del Cabildo.

ARTICULO 78. DE LOS REGIDORES Y ALGUACILES. ELECCIÓN: Los Regidores y Alguaciles de la Honorable Corporación, serán elegidos o nombrados voto popular abierto por la mayoría de votos de los comuneros que asisten a la asamblea, en la fecha correspondiente al último domingo del mes de noviembre, tendrán un periodo de 1 año que se inicia el primero de enero siguiente a la fecha de elección con posibilidad de ser reelegido para tres periodos siguientes.

ARTICULO 79. CANDIDATOS: Los candidatos a regidores y alguaciles se escogerán de la siguiente manera:

- Cinco (5) serán escogidos por el Cabildo de la Corporación Saliente y con el aval de la comunidad
- Cinco (5) representando a las zonas del resguardo.
- Uno (1) por el pueblo y
- Uno (1) representando a las organizaciones existentes en el territorio.

PARAGRAFO 1: En caso de que el cabildo no pueda nombrar los cinco (5) de la corporación saliente o uno o varios no acepten, la asamblea los nombrará.

ARTICULO 80. REQUISITOS: Para ser Regidor y/o Alguacil de la Honorable Corporación del Cabildo, se requiere:

1. Indígena nacido en el Resguardo o haber residido en el respectivo durante 5 años anteriores a su elección.
2. Ser miembro activo del Cabildo y tener aceptación por la comunidad.
3. Ciudadano en ejercicio.
4. No haber vendido, arrendado e hipotecado las tierras de uso colectivo.
5. Tener tierra de resguardo o seguir proceso de sedencia de propiedad privada a uso colectivo.
6. Estar a paz y salvo con la comunidad y con el cabildo.



**GRAN TERRITORIO DE LOS PASTOS
RESGUARDO INDÍGENA DE GUACHAVÉS
MUNICIPIO DE SANTACRUZ
NIT. 800217996-5**

7. Adquirir bajo juramento en la posición un compromiso de fidelidad en las decisiones políticas, sociales, económicas, administrativas, ambientales y en defensa del territorio.
8. No ser servidor público.
9. No tener afiliación política diferente a la de AICO
10. No haber traicionado al movimiento de autoridades indígenas de Colombia AICO.
11. Conocer el reglamento interno del resguardo.

ARTICULO 81. FUNCIONES DE LOS REGIDORES. Los regidores de la Honorable Corporación ejercerán las siguientes funciones.

1. Aprobar el presupuesto de rentas y gastos del Cabildo correspondiente al Sistema General de Participaciones.
2. Cumplir con las funciones que le asigne la autoridad en su conjunto.
3. Conservar el orden público en el Resguardo de conformidad con los usos y costumbres y la ley.
4. Colaborar en las actividades que se programen en el Resguardo.
5. Testigos ineludibles en la repartición de tierras.
6. Acompañar al Gobernador en las reuniones que se programen con la comunidad y en los demás Resguardos.
7. Acompañar al Gobernador en todas las funciones y ayudar a tomar decisiones.
8. Cuando el Gobernador no asiste son delegados con voz y voto.
9. Apoyar mutuamente las decisiones de la autoridad en su conjunto en caso de conflicto con comuneros en los casos de repartición de tierras.

ARTICULO 82. FUNCIONES DE LOS ALGUACILES. Los Alguaciles tendrán las siguientes funciones.

1. Junto con los Regidores son los encargados de aprobar el presupuesto de rentas y gastos del Cabildo correspondientes al Sistema General de Participaciones.
2. Se encargan de ejecutar justicia siguiendo el debido proceso basándose el derecho mayor la constitución, las leyes, el reglamento interno, los usos y costumbres.
3. Conservar el orden público en el Resguardo de conformidad con los usos y costumbres y la ley.
4. Castiga y purifica con el perrero a los cabildantes que infringen las reglas del Cabildo.



**GRAN TERRITORIO DE LOS PASTOS
RESGUARDO INDÍGENA DE GUACHAVÉS
MUNICIPIO DE SANTACRUZ
NIT. 800217996-5**

5. Castiga y purifica al adjudicado recomendándole que no puede vender, arrendar ni hipotecar las tierras entregadas para su bien y uso porque estas le pertenecen al Cabildo.
6. Imponer el orden en todas las actividades dentro del territorio.
7. Mantener el orden en todas las reuniones.
8. Es el escudo de cada uno de los miembros de la Corporación.
9. Llevar el listado de los comuneros que infringen las reglas e informan a la Honorable Corporación para que pongan las sanciones.

ARTICULO 83. POSICIÓN Y JURAMENTO: Los Regidores y Alguaciles tomaran posesión de acuerdo a la ley 89 en presencia del señor alcalde, y/o autoridad mayor, si fuera el caso presentando su respectivo juramento y su acta de elección, se posesionará de acuerdo a usos y costumbres y la ley.

ARTICULO 84. INHABILIDADES. No podrá ser elegido ni designado Regidor ni Alguacil, quien:

1. Haya sido condenado a pena privativa de la libertad 5 años anteriores a su elección.
2. Se halle en procesos judiciales o haya sido sancionado o castigado por la autoridad y/o la comunidad Indígena.
3. Se haya desempeñado como Gobernador o como miembro de la Honorable Corporación en elecciones anteriores y no haya demostrado transparencia en el manejo de recursos del estado o comunidad, equidad, honestidad, solidaridad y eficiencia.
4. No este a PAZ Y SALVO con el Cabildo y con la comunidad.
5. No podrá ser regidor y alguacil el comunero en segundo grado de consanguinidad primero de afinidad de los candidatos
6. No podrán ser regidores ni alguaciles dos hermanos.
7. Los indígenas adoptados no podrán ser elegidos como miembros de la honorable Corporación del Cabildo si no cumplen cinco (5) años de adopción y de servicio

ARTICULO 85. NULIDAD DE ELECCIÓN. Persona elegida como Regidor y/o Alguacil podrá ser anulado su cargo en los casos siguientes:



1. Inclinación por un determinado candidato a Gobernador, por lo tanto, se le compruebe: Compra de votos, dadas a los electores, Engaños, Promesas, Violación a cualquier artículo de este reglamento.
2. Quien no acate, respalde o fortalezca las decisiones de la comunidad y el cabildo.
3. Quien no esté dispuesto a sanear el resguardo.

ARTICULO 86. FALTAS ABSOLUTAS. Son faltas absolutas de los Regidores y Alguaciles:

1. La muerte.
2. Renuncia aceptada.
3. Incapacidad física.
4. Destitución.
5. Incapacidad por enfermedad superior a 90 días.

ARTICULO 87. FALTAS TEMPORALES. Son faltas temporales de los regidores y alguaciles:

1. Permisos para separarse del cargo.
2. Ausencia forzada involuntaria.
3. Suspensión provisional en el desempeño de sus funciones.
4. Licencia superior a un mes.

ARTICULO 88. RENUNCIAS, PERMISOS Y LICENCIAS. La renuncia, Licencia o permiso de los Regidores y Alguaciles para separarse transitoria o definitivamente de su cargo, debe presentarse en forma oral y escrita presentando los respectivos descargos manifestando su voluntad de hacer dejación del cargo, la cual posteriormente será presentada a la comunidad Indígena para ser analizada y poder tomar decisiones al respecto.

ARTICULO 89. CAUSALES DE DESTITUCIÓN. La corporación en reunión ordinaria y/o extraordinaria podrá determinar cómo causal de destitución las siguientes:

1. Cuando la justicia ordinaria haya proferido justicia condenatoria de carácter penal debidamente ejecutoriado.



**GRAN TERRITORIO DE LOS PASTOS
RESGUARDO INDÍGENA DE GUACHAVÉS
MUNICIPIO DE SANTACRUZ
NIT. 800217996-5**

2. Falte a 3 reuniones consecutivas de carácter ordinario sin ningún tipo de permiso o haya acumulado 10 faltas en 1 año sean ordinarias y/o extraordinarias.
3. Por exceso a abuso de autoridad.
4. No asistan a 3 mingas como mínimo en el año.

ARTICULO 90. CASTIGOS: Los Regidores y Alguaciles serán castigados con usos y costumbres en los siguientes casos.

1. No asista a una reunión ordinaria sin su debida justificación.
2. Cuando se presente en estado de embriaguez ante la comunidad.
3. Cuando llegue tarde a reuniones programadas o a actos públicos.
4. Cuando no acata las leyes, normas, usos y costumbres que rigen al Resguardo.
5. Cuando no impongan el orden habiendo necesidad de hacerlo.
6. No participen de las mingas.

ARTICULO 91. DESIGNACIÓN: La comunidad reunida y por unanimidad para los casos de falta absoluta o suspensión procederá a elegir otro comunero que cumpla con requisitos para que se asuma las funciones que el anterior deja de cumplir.

ARTICULO 92. DEL SECRETARIO. En el Cabildo Indígena de Guachavés, habrá un secretario quien organice todo lo relacionado con las asambleas programadas y de informe general a la comunidad. Tendrá derecho a unos beneficios económicos que la autoridad le asigne de los recursos de transferencias de la Nación.

ARTICULO 93. NOMBRAMIENTO. El secretario será nombrado por el señor Gobernador y de su absoluta confianza y por un periodo de 1 año.

ARTICULO 94. REQUISITOS: Para ser elegido como secretario se requiere:

1. Ser miembro activo del Cabildo.
2. Indígena nacido en el Resguardo o haber residido 5 años anteriores a su elección.
3. Conocer de legislación indígena
4. Disponibilidad de tiempo



ARTICULO 95. FUNCIONES: Son funciones del secretario, las siguientes:

1. Contar con disponibilidad para estar puntual en las asambleas.
2. Levantar actas de todas las reuniones de la corporación.
3. Elaborar toda clase de constancias para los comuneros.
4. Elaborar y firmar títulos de adjudicación de tierras.
5. Manejar archivo existente en el Cabildo.
6. Llevar registro actualizado del libro de empadronamiento.
7. Archivar toda clase de documentos pertenecientes a la Honorable Corporación.
8. Todas las funciones que la comunidad y el cabildo le asigne para su buen funcionamiento.
9. Que tenga conocimiento de la parte indígena, se identifique y sea miembro activo de la comunidad indígena.

ARTICULO 96. POSESIÓN Y JURAMENTO: El secretario tomaran posesión de sus cargos ante el señor Gobernador y/o autoridad mayor presentando su respectivo juramento y acta de acuerdo usos y costumbres y la ley.

ARTICULO 97. INHABILIDADES: No podrá ser designado secretario quien:

1. Haya sido condenado a pena privativa de la libertad 5 años anteriores a su elección.
2. Se halle en procesos judiciales o haya sido sancionado o castigado por la autoridad y/o la comunidad Indígena.
3. Se haya desempeñado como Gobernador o como miembro de la Honorable Corporación en elecciones anteriores y no haya demostrado transparencia en el manejo de los recursos del estado o comunidad, equidad, honestidad, solidaridad, eficiencia.
4. No esté a PAZ Y SALVO con el Cabildo.

ARTICULO 98. DESTITUCION DEL CARGO: Persona nombrada como secretario podrá ser destituido de su cargo cuando demuestre incapacidad para desempeñar las diferentes funciones y apoye a determinado candidato a Gobernador.

ARTICULO 99. FALTAS ABSOLUTAS DEL SECRETARIO: Y TESORERO

Son faltas absolutas del Secretario y Tesorero.



1. La muerte.
2. Renuncia aceptada.
3. Incapacidad física.
4. Destitución.
5. Incapacidad por enfermedad superior a 90 días.

ARTICULO 100. CASTIGOS: El secretario será castigado en los siguientes casos.

1. No asistan a una reunión ordinaria sin su debida justificación.
2. Cuando se presenten en estado de embriagues ante la comunidad.
3. Cuando lleguen tarde a reuniones programadas o a actos públicos.
4. Cuando no acatan las leyes, normas, usos y costumbres que rigen al Reguardo.
5. Cuando no tengan al día informes correspondientes a sus funciones.
6. Cuando no participen de las mingas.

ARTICULO 101. DESIGNACIÓN DEL SECRETARIO. El señor Gobernador para los casos de falta absoluta o suspensión procederá a nombrar otro comunero que cumpla con los requisitos para que asuma las funciones que el anterior deja de cumplir.

V. ASPECTO POLITICO

ARTICULO 102. El Cabildo indígena de Guachavés, es socio fundador del Movimiento de Autoridades Indígenas de Colombia – AICO y por lo tanto hace parte del AICO Social y del AICO político.

ARTICULO 103. Indígena que se encuentre censado en el Libro de Empadronamiento del cabildo, para aspirar a cargo de elección popular (local, regional y nacional) por otro movimiento o partido tradicional, debe contar con el permiso u autorización de su autoridad tradicional, de lo contrario se le aplicara doble militancia y la sanción correspondiente.



**GRAN TERRITORIO DE LOS PASTOS
RESGUARDO INDÍGENA DE GUACHAVÉS
MUNICIPIO DE SANTACRUZ
NIT. 800217996-5**

ARTICULO 104: Todo comunero que este censado en el Libro de Empadronamiento, debe acatar los acuerdos políticos que el Cabildo como autoridad tradicional en conjunto con la comunidad realice con un grupo, partido o movimiento, cuando de elegir cargos de elección popular a nivel nacional, Departamental y Municipal se trata, mirando siempre el fortalecimiento social, cultural, político, y territorial del Resguardo y la comunidad.

PARAGRAFO 1. Cabildante o comunero que no se identifique con los candidatos Indígenas a cargos de elección popular, en asamblea deberán sustentar su decisión

PARAGRAFO 2: Cuando haya representantes Indígenas aspirantes a cargos de elección popular a cualquier nivel deben tener el respaldo absoluto de la comunidad y de la autoridad Indígena del Resguardo de Guachavés.

ARTICULO 105. Los Indígenas aspirantes a cargos de elección popular (Alcaldía, concejos Municipales, Asambleas, senado, congreso), deben salir de una asamblea general para poder obtener su respectivo aval.

ARTICULO 106. Los acuerdos o compromisos políticos que se realicen con un aspirante a cargo de elección popular, deben realizarse en Asamblea General.

ARTICULO 107. Comunero o comuneros que hayan sido elegidos a cualquier cargo de elección popular a cualquier nivel, deben sujetarse a la ley Indígena basada en sus usos y costumbres, frente a su comunidad.

ARTICULO 108: Las determinaciones políticas, económicas, sociales, culturales y ambientales; tomadas por los indígenas que hayan sido elegidos popularmente, deben ser concertadas con el cabildo vigente y los exgobernadores.

ARTICULO 109: Para ser candidato a la Alcaldía, Concejo, Asambleas y Congreso, es requisito indispensable haber sido cabildante o comunero activo que haya liderado procesos que fortalezcan la comunidad Indígena para poder para así obtener un respectivo aval de Autoridades Indígenas de Colombia AICO.



GRAN TERRITORIO DE LOS PASTOS
RESGUARDO INDÍGENA DE GUACHAVÉS
MUNICIPIO DE SANTACRUZ
NIT. 800217996-5

ARTICULO 110: REFORMA DEL REGLAMENTO INTERNO: Para reformar el presente reglamento se debe contar el visto bueno de la comunidad, exgobernadores y ex cabildantes; el cual será debatido en una reunión extraordinaria donde se analizará la conveniencia y las propuestas de reforma.

ARTICULO 111: El presupuesto de gastos y rentas del Cabildo será debatido en corporación de acuerdo al plan de vida y a las normas internas del resguardo

ARTICULO 112: APROBACION Y ADOPCIONDE LOS AJUSTES Y MODIFICACIONES: Los ajustes y modificaciones realizadas al presentes Reglamento Interno del Cabildo Indígena de Guachavés, serán aprobadas mediante una Acta de Asamblea y adoptados por el cabildo indígena de Guachavés, mediante Resolución.

ARTICULO 113: Fírmese, comuníquese, notifíquese, cúmplase, y colóquese en carpeta.

ARTICULO 114. VIGENCIA. El presente reglamento interno deroga las disposiciones que le sean contrarias y rige a partir de la fecha de su aprobación y publicación, aprobado y adoptado en el Cabildo Indígena de Guachavés a los diez (10) días del mes de noviembre del año Dos Mil Diecisiete (2017).

Anexos:

- firmas originales de corporación y comunidad
- Acta de aprobación N° 019 del 10 de noviembre de 2017
- Resolución de adopción 009 del 10 de noviembre de 2017

**EL(LA) SUSCRITO(A) DIRECTOR(A) DE LA DIRECCION DE ASUNTOS INDIGENAS, ROM Y
MINORIAS DEL MINISTERIO DEL INTERIOR**

HACE CONSTAR

Que consultado el sistema de información indígena de Colombia (SIIC), se registra el Resguardo Indígena YASCUAL en las bases de datos de esta Dirección.

Que consultado el auto-censo sistematizado y aportado por el Resguardo Indígena YASCUAL, se registra el Señor (a): JAIRO ALEXANDER NATIB PULISTAR, identificado (a) con CC y número de documento: 1086982540, en el(los) censo(s) del(los) año(s) 2014, 2015, 2016, 2017, 2020, 2022, 2024, 2025.

Se expide en Bogotá D.C., al(os) 10 día(s) del mes 2 del año 2026.

La presente información se emite conforme a los registros que al día de hoy reposan en el Sistema de Información Indígena de Colombia



Roquelina Sabis Blanco Moscarella
Director de Asuntos Indígenas, Rom y Minorías



Url Verificación

Este Certificado Consta De 01 Hoja(s), y su generación es totalmente gratuito.

**EL(LA) SUSCRITO(A) DIRECTOR(A) DE LA DIRECCION DE ASUNTOS INDIGENAS, ROM Y
MINORIAS DEL MINISTERIO DEL INTERIOR**

HACE CONSTAR

Que consultado el sistema de información indígena de Colombia (SIIC), se registra el Resguardo Indígena YASCUAL en las bases de datos de esta Dirección.

Que consultado el auto-censo sistematizado y aportado por el Resguardo Indígena YASCUAL, se registra el Señor (a): JAIRO ALEXANDER NATIB PULISTAR, con CC número 1086982540, Estado Activo.

La presente información se emite conforme al registro UNICO de censo que al día de hoy reposa en el Sistema de Información Indígena de Colombia e identifica al portador como INDIGENA para el acceso a sus derechos constitucionales ante las entidades que lo requieran.

Se expide en Bogotá D.C., al(os) 11 día(s) del mes 5 del año 2026.

La presente información se emite conforme a los registros que al día de hoy reposan en el Sistema de Información Indígena de Colombia



Roquelina Blanco Moscarella

Director (E) de Asuntos Indígenas, Rom y Minorías



Url Verificación

Este Certificado Consta De 01 Hoja(s), y su generación es totalmente gratuito.



DECLARACIÓN JURAMENTADA

Yo, **MARIO FREDY ANAMA DÍAZ**, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.130.667.479 expedida en Cali, actuando en mi condición de Gobernador Suplente del Resguardo Indígena de Guachavés, de manera libre y voluntaria, bajo la gravedad del juramento, me permito manifestar lo siguiente:

PRIMERO. Que hago parte de las autoridades del Resguardo Indígena de Guachavés, en calidad de Gobernador Suplente, dentro de la estructura de gobierno propio reconocida por la comunidad conforme a sus usos y costumbres para la vigencia 2026.

SEGUNDO. Que respecto de la Resolución 007 de 2026 expedida por el Ministerio del Interior, manifiesto que dicho acto administrativo jamás me ha sido notificado de manera personal, directa o formal, ni física ni electrónicamente, ni mediante correo electrónico, notificación por aviso, comunicación institucional, publicación oficial o cualquier otro medio previsto en el ordenamiento jurídico colombiano.

TERCERO. Que tampoco he recibido comunicación alguna por parte del Ministerio del Interior informando la expedición de dicha resolución, su contenido integral o los efectos jurídicos derivados de la misma.

CUARTO. Que el conocimiento parcial que algunas personas de la comunidad tuvieron respecto de la existencia de dicho acto administrativo se produjo únicamente a través de imágenes o fragmentos difundidos informalmente mediante la aplicación de mensajería WhatsApp, sin que ello pueda considerarse una notificación válida o una garantía real de acceso a la información.

QUINTO. Que, en consecuencia, desconozco formalmente la fecha exacta en la cual el Ministerio del Interior expidió la Resolución 007 de 2026, así como las actuaciones administrativas surtidas para su comunicación o publicación frente a la comunidad indígena del Resguardo de Guachavés.

SEXTO. Que la presente declaración se rinde con destino a las actuaciones judiciales y administrativas que se adelanten para la protección de los derechos fundamentales de la comunidad indígena del Resguardo de Guachavés y de sus autoridades tradicionales.

Para constancia, se firma la presente declaración juramentada.

MARIO FREDY ANAMA DÍAZ.

C.C. No. 1.130.667.479 expedida en Cali
Gobernador Suplente.
Resguardo Indígena de Guachavés.



1. IDENTIFICACION DE PERSONA
DETENIDA POR: JUAN CARLOS GONZALEZ
EXTENSION: 1.130.662.414
NOMBRE: Mario Freely
COMPROBACION: Ananda Diaz
QUINCE DIAS: Cell
EXPOSICION: Cell
NOMBRE: Cell
EL PRESIDENTE: Cell
CONTEN: Cell
10 MAY 2008
A TITULO DE...
EJECUTIVO...



ARTICULO 1.- Inscríbase en el Registro de Cabildos y/o Autoridades Indígenas a las siguientes personas como miembros del Cabildo del Resguardo Indígena Guachaves, ubicado en jurisdicción del municipio de Santacruz, en el departamento de Nariño, para el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2026 y el 31 de diciembre de 2026:

NOMBRE	CARGO	cédula
SANDRA LETICIA CUASTUMAL MUESES	Gobernadora principal	59.795.476
MARIO FREDY ANAMA DIAZ	Gobernador suplente	1.130.667.479
JOSE HERNAN ALVAREZ	Regidor primero principal	13.067.375
RODRIGO FRANCISCO ZAMBRANO	Regidor primero suplente	18.187.647
CONCEPCION CARANGUAY	Regidor segundo principal	27.455.260
AYDA LEONOR CHAZATAR	Regidor segundo suplente	27.455.674
PASTORA GETIAL QUENORAN	Regidor tercero principal	27.456.025
CRISTIAN FERNANDO DELGADO	Regidor tercero suplente	1.086.983.091
JAVIER ANAMA QUENORAN	Aiguacil primero principal	98.415.873



RESOLUCIÓN NÚMERO 007 DE 2026 **PÁGINA 5**

Continuación de la resolución "POR LA CUAL SE INSCRIBE EN EL REGISTRO DE CABILDOS Y/O AUTORIDADES INDÍGENAS A LOS MIEMBROS DEL CABILDO DEL RESGUARDO INDÍGENA GUACHAVES, UBICADO EN JURISDICCIÓN DEL MUNICIPIO DE SANTACRUZ, EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO."

JESUS HERNANDO YELA	Aiguacil primero suplente	6.265.964
DEYSI JOHANA BENAVIDES	Aiguacil segundo principal	1.088.729.387
YURY SENEIDA ROSERO	Aiguacil segundo suplente	1.004.596.773
JUAN GABRIEL CORAL VILLOTA	Aiguacil tercero principal	1.086.980.115
GIOVANY FERNEY ATILLO GETIAL	Aiguacil tercero suplente	1.004.596.883
JAIRO ALEXANDER NATIB	Secretario general del Cabildo	1.086.982.540

PARÁGRAFO. Téngase a la señora **SANDRA LETICIA CUASTUMAL**